

# **CRONICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**AÑO 1983 (V) y 1984 (I)**

**por los Departamentos de Derecho Internacional Público  
y Derecho Internacional Privado  
de la Universidad de Sevilla (\*)**

## **SUMARIO (\*\*)**

- 1. CUESTIONES GENERALES.—2. FUENTES.—3. ESTADOS MIEMBROS.—4. ORGANOS Y COMPETENCIAS.—5. FUNCIONARIOS.—**
- 6. LIBERTADES COMUNITARIAS.—7. POLITICA COMUNITARIA.—**
- 8. CUESTIONES PROCESALES.—9. RELACIONES EXTERIORES.**

### **1. CUESTIONES GENERALES**

#### **1.1. Fundamentos de la Comunidad**

#### **1.2. Naturaleza jurídica de la Comunidad**

#### **1.3. Derechos fundamentales**

#### **1.4. Orden jurídico comunitario**

##### **1.4.1. Derecho comunitario-Derecho Internacional**

**1.4.2. Derecho comunitario-Derechos nacionales.**—En la sentencia de 22 de febrero de 1984 (1) el Tribunal comunitario afirma que la instauración de gravámenes compensatorios para reinstaurar las condiciones normales de competencia

---

(\*) Han colaborado los doctores Millán Moro, Olivares d'Angelo, Peláez Marón y Pérez Bevilá, profesores titulares, y Glón Larrucea, profesor adjunto contratado, y el licenciado Naranjo González-Pola, profesor ayudante, bajo la dirección de los profesores Carrillo Salcedo y Sánchez Appellániz.

(\*\*) El sumario que encabeza la presente crónica deberá entenderse referido, en su totalidad, sólo a las 77 sentencias y 3 autos que constituyen la actividad del Tribunal Incluida en los volúmenes 10 y 11 de 1983 y 1 y 2 de 1984 del *Recueil de la Jurisprudence de la Cour*.

(1) As. 337/82, St. Nikolaus Brunnerel, Rec. 1984-2, pp. 1051-1074, cdos. 17 a 22.

de un producto agrícola no sujeto aún a una organización de mercado, se justifica según que las medidas con las que poner remedio a los desequilibrios existentes en los mercados de los diferentes Estados miembros sean o no conformes con el Derecho comunitario.

Si la Comisión estimara que el Estado miembro, autor de las medidas compensatorias, ha faltado a las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario, debe ejercer la competencia que tiene atribuida por los artículos 155 y 169 del Tratado CEE e incoar el procedimiento previsto en esta última disposición.

De lo dicho, concluye el Tribunal comunitario, resulta que a estos efectos el artículo 46 del Tratado CEE puede ser aplicado después de agotado el período transitorio a todos aquellos productos que no hayan sido aún objeto de una reglamentación del mercado.

En consecuencia, las medidas nacionales —gravámenes compensatorios— exigidos por un Estado miembro, es resultado de la aplicación del reglamento de la Comisión 851/76 (2), que permite gravar el alcohol etílico obtenido en Francia con ocasión de su importación a la República Federal de Alemania y países del Benelux y que ese acto encuentra su base en dicho artículo 46 del Tratado y de cuya conformidad con el Derecho comunitario originario no cabe duda.

En la sentencia de 29 de febrero de 1984 (3), ha dicho el juez comunitario que el sobrepasar la cuota de acero asignada a una empresa, se debía a la existencia de acuerdos internos entre empresas en el seno de Eurofer y a las incertidumbres de esa empresa en cuanto a la significación de esos acuerdos.

Las cuotas de dicha empresa, indica el Tribunal estaban fijadas de manera precisa y neta por la Comisión, de manera que no podía tener ninguna duda en cuanto a sus obligaciones en relación con el Derecho comunitario. Por tanto, un error de esa empresa en cuanto al volumen de transacciones a las que estaba obligada por los acuerdos de Eurofer, no puede justificar, de ninguna manera, una infracción a las obligaciones que resultan para ella del Derecho comunitario en lo que respecta a las cuotas de producción de acero que tiene asignada y no constituye una circunstancia que justifique una rebaja en la cuantía de la multa.

## 1.5. Otras cuestiones

**1.5.1. Noción de fuerza mayor.**—En la sentencia de 9 de febrero de 1984 (4), ha declarado el Tribunal que, según su jurisprudencia constata, la noción de fuerza mayor contempla esencialmente, abstracción hecha de las particularidades de los ámbitos específicos en que es utilizada, circunstancias extrañas que hacen imposible la realización del hecho en cuestión. Incluso si no presupone una imposibilidad absoluta, exige, sin embargo, que se trata de dificultades anormales, independientes de la voluntad de la persona y que aparezcan inevitables incluso si todas las diligencias útiles han sido ejecutadas.

(2) De 9 de abril de 1976. JOCE, núm. L 96, p. 41.

(3) As. 270/82. Estel. Comisión, Rec. 1984-2, pp. 1195-1228, cdo. 19.

(4) As. 284/82 Busseni/Comisión, Rec. 1984-2, pp. 557-574, cdo. 11.

**1.5.2. Responsabilidad extracontractual de la Comunidad.**—El Tribunal, en sentencia de 1 de diciembre de 1983 (5) afirma que para que pueda darse responsabilidad de la Comunidad se requiere que se reúnan un conjunto de requisitos como son: la ilegalidad del comportamiento que se reprocha a las instituciones; la realidad del daño, y la existencia de un vínculo de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio causado. En el caso concreto que se plantea al Tribunal el funcionario no ha podido demostrar la existencia de ese vínculo de causalidad entre un comportamiento ilegal de la Comisión y el perjuicio invocado, por lo que no ha lugar a la responsabilidad de la Comunidad.

**1.5.3. Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de decisiones en materia civil y comercial de 27 de septiembre de 1968**

**1.5.3.1. Primacía sobre las legislaciones internas.**—En la sentencia de 15 de noviembre de 1983 (6), ha señalado el Tribunal que el convenio, al proponerse determinar la competencia de las jurisdicciones de los Estados contratantes en el orden intracomunitario en materia de competencia civil, debe prevalecer sobre las disposiciones internas que le sean incompatibles.

**1.5.3.2. Verificación de la competencia y de la admisibilidad.**—En esta misma sentencia (7) declara el Tribunal que el artículo 19 del convenio impone al juez nacional la obligación de declararse de oficio incompetente cuando compruebe la existencia de una competencia exclusiva de una jurisdicción de otro Estado contratante según el artículo 16 del convenio, incluso en el marco de un recurso de casación, cuando la regla de procedimiento nacional limite el examen de la jurisdicción a los únicos medios invocados por las partes.

**1.5.3.3. Noción litigios en materia de inscripción o de validez de patentes: Interpretación autónoma.**—La noción de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes», mencionada en el artículo 16, párrafo 4, del convenio, debe ser considerada como una noción autónoma destinada a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados contratantes (8).

**1.5.3.4. Noción «litigios en materia de inscripción o de validez de patentes»: Límites.**—Esta noción no cubre, sin embargo, una diferencia entre un empleado autor de una invención, por la cual ha solicitado u obtenido una patente, y su empleador cuando el litigio afecta a sus derechos respectivos sobre esta patente derivado de la relación de trabajo (9).

(5) As. 217/82. Depoortere/Commission, Rec. 1983-11, pp. 4003-4021, cdos. 10 y 12.

(6) As. 288/82. Duijnsteet/Goderbauer, Rec. 1983-10, pp. 3663-3687, cdo. 14.

(7) Ibid., cdo. 15.

(8) Ibid., cdo. 18.

(9) Ibid., cdo. 28.

## 2. FUENTES

### 2.1. Cuestiones generales

**Obligación de motivar los actos.**—El alcance de la obligación de motivar los actos, consagrada en el artículo 190 del Tratado CEE, depende de la naturaleza del acto en cuestión, precisa el Tribunal en sentencia de 29 de febrero de 1984 (10). En lo que se refiere a los actos de aplicación general, se satisfacen las exigencias del artículo 190 si los motivos explican lo esencial de las medidas prescritas y no se puede exigir una motivación específica que apoye todos los detalles que pueda implicar semejante medida, siempre que éstos entren en el marco de la sistemática de conjunto.

#### 2.1.1. Relación entre normas comunitarias

#### 2.1.2. Lagunas de derecho

**2.1.3. Interpretación.**—De las exigencias tanto en la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad, se desprende que los términos de una disposición de Derecho comunitario que no remita expresamente al derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y alcance, deben encontrar normalmente una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad y ha de hacerse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la reglamentación en la que está inserta (11).

Por otra parte, en la sentencia de 13 de diciembre de 1983 (12), ha declarado el Tribunal que cuando un texto del Derecho comunitario derivado es susceptible de más de una interpretación, conviene dar preferencia a aquella que hace de la disposición conforme al Tratado antes de la que conduzca a su incompatibilidad con el mismo.

Finalmente, en la sentencia de 18 de enero de 1984 (13), ha dicho el Tribunal que si bien los términos de una disposición de Derecho comunitario que no contenga remisión expresa alguna al derecho nacional, ha de tener una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad la falta de toda indicación precisa en relación con ciertos términos referentes a la venta de carne de bovino, hace suponer que el legislador comunitario no ha querido imponer una armonización o una uniformidad en los métodos de descuartizado de los animales en los diferentes Estados miembros, en orden a reglamentar las restituciones a la exportación de carne bovina.

(10) As. 37/83, Rewe-Zentrale/Landwirtschaftskammer Rheinland, Rec. 1984-2, pp. 1229-1255, cdo. 13.

(11) Sentencia de 12 de noviembre de 1983, as. 292/82, Merck, Rec. 1983-10, pp. 2731-3801, cdo. 2; sentencia de 18 de enero de 1984, as. 327/82, EKRO, Rec. 1984-1, pp. 107-130, cdo. 11.

(12) As. 218/82, Rec. 1983-11, pp. 4063-4082, cdo. 13.

(13) As. 327/82, EKRO, Rec. 1984-1, pp. 107-130, cdos. 1 a 16 y parte dispositiva.

La Comisión, consciente de la diferente significación de los términos empleados en el reglamento, ha querido hacer una remisión implícita a los usos y costumbres existentes en los diferentes Estados miembros e incluso a los existentes en las regiones.

En estas condiciones, no corresponde al Tribunal dar a estos términos una definición comunitaria uniforme sino que compete al juez nacional determinar la delimitación anatómica exacta de cada porción de carne designado en el reglamento comunitario por referencia al método normalmente utilizado en el Estado miembro o en la región.

## 2.2. Tratados

**2.3. Reglamento.**—El Tribunal, en sentencia de 19 de enero de 1984 (14) señala que el Consejo, en la elaboración del reglamento 160/80 (15), sobre revisión del coeficiente corrector aplicable a los sueldos de los funcionarios, no ha violado la declaración común sobre la concertación interinstitucional de 4 de marzo de 1975 (16), ya que a pesar de que el Parlamento solicitó en vano la concertación para este caso concreto, se trataba de un reglamento sin implicaciones financieras notables, por lo que no era de aplicación el procedimiento de concertación interinstitucional.

## 2.4. Directivas

**2.4.1. Aplicación.**—En la sentencia de 31 de enero de 1984 (17), ha declarado el Tribunal que aun sin ser íntegramente aplicable la directiva relativa a la realización de controles sanitarios a las carnes frescas procedentes de países terceros, por no haberse adoptado por las instituciones comunitarias las medidas de ejecución indispensables, el artículo 11 de la directiva 72/461 (18), que se ha introducido en la misma en previsión de esta eventualidad, sí es de aplicación. Dicho precepto se remite a las normas nacionales sanitarias a la hora de realizar los controles sobre dichas carnes, con la reserva de que éstos no sean más favorables que las condiciones previstas por la propia directiva para los intercambios intracomunitarios. Ello supone que los Estados miembros pueden seguir percibiendo las detracciones pecuniarías previstas en sus respectivas legislaciones sobre las importaciones de carne fresca procedentes de países terceros con la doble condición de que no sean más favorables que las que gravan los mismos productos procedentes de otros Estados miembros de la Comunidad, cuando el

(14) As. 211/80, *Advernier/Commission*, Rec. 1984-1, pp. 131-164, cdos. 22 y 23; As. 260/80, *Andersen/Conseil*, Rec. 1984-1, pp. 177-194, cdos. 26 y 27; As. 262/80, *Andersen/Parlement*, Rec. 1984-1, pp. 195-209, cdos. 24 y 25.

(15) De 21 de enero de 1980, *JOCE*, núm. L 20, p. 1.

(16) *JOCE*, núm. C 89, p. 1.

(17) Del Consejo de 12 de diciembre de 1972, *JOCE*, núm. L 302, p. 24.

(18) As. 1/83, *I.F.G.*, Rec. 1984-1, pp. 349-376, cdos. 12 y 13.

control se haya realizado por el Estado miembro de expedición y que tales de-tracciones pecuniarias mantengan una relación adecuada con los costos de las operaciones de control.

**2.4.2. Efecto directo.**—Las disposiciones de la directiva 65/65 (19) que fijan las condiciones de concesión, suspensión o retirada de la autorización de puesta en el mercado de especialidades farmacéuticas, especialmente su artículo 21, son incondicionales y suficientemente precisas para poder ser invocadas ante una jurisdicción nacional por las personas afectadas, frente a toda disposición legisla-tiva, reglamentaria o administrativa de derecho nacional que no sea conforme a la directiva, observa el Tribunal en sentencia de 26 de enero de 1984 (20).

**2.4.3. Efecto útil.**—Según una jurisprudencia constante del Tribunal, un parti-cular puede fundamentar su demanda ante un juez nacional en las disposiciones de una directiva comunitaria incompletamente o no ejecutada por un Estado miem-bro (21). De lo contrario se dejaría sin efecto útil las disposiciones del Tratado y de la directiva (22).

**2.5.—Decisiones.**—Según la jurisprudencia del Tribunal, no se excluye un efecto retroactivo de las decisiones comunitarias, si bien las decisiones que ten-gan dicho efecto deben justificarlo en sus motivaciones (23).

## 2.6. Otros actos

## 2.7. Principios generales del Derecho y del Derecho comunitario

**2.7.1. Principio de seguridad jurídica.**—La legislación comunitaria debe ser segura y su aplicación previsible por los justiciables, subraya el Tribunal en sen-tencia de 22 de febrero de 1984. Por lo que el hecho de retrasar la fecha de entrada en vigor de un acto de alcance general, cuando la fecha inicialmente pre- vista ha pasado ya, es en sí susceptible de afectar dicho principio.

Por otra parte, declara el Tribunal que si por regla general el principio de la *seguridad jurídica* se opone a que la aplicación en el tiempo de un acto comuni- tario tenga su punto de partida de aplicación en fecha anterior a su publicación, es posible aceptarlo a título excepcional, cuando el fin que se pretende lo exige y la confianza legítima de los interesados es debidamente respetada (25).

(19) Del Consejo, de 26-1-1965, relativa a la armonización de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas concernientes a las especialidades farmacéuticas, JOCE, núm. 22 de 9-2-1965, p. 369.

(20) As. 301/82, Clin-Midy/Belgique, Rec. 1984-1, pp. 251-265, cdo. 4.

(21) Sentencia de 15 de diciembre de 1983, as. 5/85, Rec. 1983-11, pp. 4233-4250, cdo. núm. 8.

(22) Rirectiva 78/1026 del Consejo de 18 de diciembre de 1978, JOCE, L 362, p. 1.

(23) Auto del Presidente del Tribunal de 1 de febrero de 1984, as. 1/84 R, Ilford/Comisión, Rec. 1984-2, pp. 423-432, cdo. 19.

(24) As. 70/83, Kloppenburg/Finanzamt Leer, Rec. 1984-2, pp. 1075-1093, cdo. 11.

(25) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 235/82, Rec. 1983-10, pp. 3949-3979, cdo. 9.

**2.7.2. Principio de libre circulación de mercancías.**—Si bien es cierto que los artículos 30 a 36 del Tratado CEE contemplan en primer lugar las medidas unilaterales de los Estados miembros, no lo es menos, observa el Tribunal en sentencia de 29 de febrero de 1984 (26), que las instituciones comunitarias también están obligadas a respetar la libertad de los intercambios intracomunitarios, principio fundamental del Mercado Común.

**2.7.3. Principio del derecho a la defensa.**—En su sentencia de 8 de noviembre de 1983 (27) el Tribunal establece que hay que tener en cuenta que el respeto de los derechos a la defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario, que tiene que observarse por la Comisión en sus procedimientos administrativos, susceptibles de llegar a sanciones en aplicación de las normas de competencia del Tratado. Tal respeto exige, entre otras cosas, que a la empresa interesada le haya sido posible hacer conocer de forma útil su punto de vista respecto de los documentos retenidos por la Comisión para fundamentar su alegación de existencia de una infracción.

### 3. ESTADOS MIEMBROS

**3.1. Principios.**—Ha recordado el Tribunal en la sentencia de 14 de febrero de 1984 (28), que los Estados miembros pueden poner en vigor medidas provisionales de conservación de los recursos de la pesca, en caso de inacción por parte del Consejo, respetando siempre la misión general de supervisión que el artículo 155 del Tratado CEE confiere a la Comisión, así como las condiciones de procedimiento y de fondo que ya han sido fijadas por el Consejo en el marco del anexo VI de la Resolución de La Haya de 3 de noviembre de 1976 y confirmadas por la declaración del Consejo CEE de 31 de enero de 1978.

De los términos combinados de la resolución y de la declaración se deduce que por lo que se refiere a las reglas de procedimiento, el Estado miembro afectado no debe poner en vigor medidas nacionales sobre conservación de los recursos pesqueros del mar sino después de haber procurado, de buena fe, la aprobación de las medidas previstas por parte de la Comisión que, por otra parte, deberá ser consultada en todas las fases del procedimiento.

#### 3.2. Competencias

#### 3.3. Derechos

**3.4. Obligaciones.**—En la sentencia de 15 de noviembre de 1983 (29) ha declarado el Tribunal que la República italiana ha faltado a las obligaciones que le

(26) As. 37/83, Rewe-Zentrale/Landwirtschaftskammer Rheinland, Rec. 1984-2, pp. 1229-1255, cdo. 18.

(27) As. 322/81, Rec. 1983-10, pp. 3461-3547, cdo. 7.

(28) As. 24/83, Gewiese et Mehlich/Scott Mackenzie, Rec. 1984-1, cdos. 7 y 8.

(29) As. 322/82, Comisión-Italia, Rec. 1983-10, pp. 3689-3706, cdos. 1 a 13 y parte dispositiva.

incumben en virtud del Tratado al no haber efectuado los controles de calidad sobre frutas y verduras comercializadas en su territorio y al no efectuar las comunicaciones mensuales, como prescribe la legislación comunitaria.

Basa su decisión el juez comunitario en el hecho de que aun reconociendo las dificultades a las que debe hacer frente el Gobierno italiano para realizar tales controles y habida cuenta de los problemas inherentes a la administración, coordinación y financiación, los primeros elementos de organización de los mercados comunitarios de estos productos que datan de 1962 preveían ya un sistema de controles de calidad y si bien la realización de un sistema de controles eficaz encuentra dificultades, el tiempo transcurrido ha debido permitir a las autoridades italianas hacer lo necesario para solventar dichas dificultades y asegurar la puesta en marcha de dispositivos de control eficaces y ejecutar las obligaciones de notificación exigidas por la reglamentación comunitaria.

Por otra parte, en la sentencia de 14 de febrero de 1984 (30), el Tribunal ha sostenido que si bien la adopción de medidas de conservación de los recursos pesqueros de sus aguas marinas, sin modificaciones de fondo y respetando las condiciones de procedimiento y de fondo exigidas por el Derecho comunitario, no se subordina a una nueva consulta de la Comisión, la modificación de las medidas existentes o la adopción de nuevas medidas nacionales con el mismo propósito, exige la notificación a la Comisión para permitirle estar informada con exactitud del estado del derecho en vigor en los distintos Estados miembros.

En sentencia de 21 de febrero de 1984 (31) el Tribunal comunitario ha señalado que si el artículo 30 del tratado de la CEE obliga a los Estados miembros, en ciertas circunstancias, a competir activamente en la libre circulación de mercancías legalmente producidas y comercializadas en otros Estados miembros —teniendo particularmente en cuenta los certificados establecidos por las autoridades competentes de los demás Estados miembros—, esta obligación no llega hasta constreñirles a efectuar controles según los métodos previstos por las legislaciones de los otros Estados miembros. Semejante exigencia entrañaría la obligación de dotarse de un correspondiente equipamiento suplementario y de un personal especializado. Esta solución, dispendiosa en el plano económico, no presenta ningún interés para el respeto de la libre circulación de mercancías, ya que ésta puede asegurarse eficazmente por otros medios.

Finalmente, según una jurisprudencia constante (32) desde que la Comunidad ha adoptado, por virtud del artículo 40 del tratado CEE los reglamentos que establecen una organización común de mercado en un sector determinado, los Estados miembros vienen obligados a abstenerse de cualquier medida destinada a atentar contra aquella organización o derogarla (33).

(30) As. 24/83, Gewiese et Mehlich/Scott Mackenzie, Rec. 1984-1, pp. 817-840, cdos. 9 a 14 y parte dispositiva.

(31) As. 202/82, Rec. 184-2, pp. 933-949, cdo. 5.

(32) Ver por todas las decisiones en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1979, as. 177/78, Rec., pp. 2161.

(33) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/83, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdo. 12.



#### 4. ORGANOS Y COMPETENCIAS

##### 4.1. Competencias comunitarias

4.2. **Consejo.**—Señala el Tribunal, en la sentencia de 14 de febrero de 1984 (34), que en virtud del artículo 102 del Acta de Adhesión de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda a las CCEE y de la adaptación de los tratados, el poder para adoptar medidas de protección de los recursos biológicos del mar, ha pasado a ser de la sola competencia del Consejo, a propuesta de la Comisión, desde el día 1 de enero de 1979.

4.3. **Comisión.**—Ante la alegación del demandante de que una doble multa impuesta a su empresa por la Comisión, supondría una acumulación de sanciones, lo cual sería contrario a lo que se establece en el artículo 58.4 del Tratado CECA y a los principios generales de derecho de buena gestión, de justicia y de equidad, responde el Tribunal en la sentencia de 29 de febrero de 1984 (35), que el artículo 5 en relación con el artículo 12 de la decisión 1831/81 (36) impone a las empresas dos obligaciones distintas: la de respetar las cuotas de producción que cada empresa tiene asignada, por un lado, y la de no sobrepasar la parte de estas cuotas que pueden vender en el interior del Mercado Común, por otro.

Si la limitación de las ventas en el Mercado Común ha de servir, y es su objetivo, para restablecer o mantener el equilibrio entre oferta y demanda en el interior de dicho mercado, la limitación de la producción global de cada empresa, trata de evitar una superproducción que, en razón de crisis siderometalúrgica, no puede tener salida ni siquiera por vía de exportación.

Ambas limitaciones tienen, pues, por objeto proteger dos intereses distintos de la Comunidad; lo que se ve confirmado por la exposición de motivos de la citada decisión, de manera que una empresa que haya violado sus obligaciones comete dos infracciones distintas contenidas en la decisión y la Comisión, por consiguiente, puede imponerle dos sanciones calculadas por separado.

Por otra parte, señala el Tribunal que no es cierto que la Comisión tenga únicamente competencias para establecer a las empresas sanciones y establecer facilidades de pago (37).

Finalmente, la buena administración del régimen de cuotas de producción de acero por las empresas de la Comunidad incumbe a la Comisión, lo que permite reconocer al demandante la existencia de una situación que justifica una apreciación diferente de la sanción impuesta por la Comisión en la decisión impugnada (38) (39).

(34) As. 24/83, Gewlese et Mehlich/Scott Mackenzie, Rec. 1984-1, cdo. 5.

(35) As. 270/82, Estel-Comisión, Rec. 1984-2, pp. 1195-1228, cdos. 25 a 28.

(36) Decisión general de la Comisión de 13 de agosto de 1981, JOCE, núm. C 222, p. 3.

(37) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 235/82, Rec. 1983-10, pp. 3949-3979, cdo. 38.

(38) Decisión general de 13 de agosto de 1982, JOCE, núm. 222, p. 3.

(39) As. 270/82, Estel-Comisión, Rec. 1984-2, pp. 1195-1228, cdos. 12 a 16 y parte dispositiva.

## 5. FUNCIONARIOS

### 5.1. Reclutamiento

#### 5.1.1. Concursos

**5.1.1.1. Objetivos del concurso y del período de prueba («stage»).**—El Tribunal, en sentencia de 17 de noviembre de 1983 (40), observa que mientras el objetivo de un concurso es seleccionar los candidatos a funcionarios siguiendo unos criterios generales y provisionales, el del período de prueba es permitir a la Administración formarse una opinión más concreta sobre las aptitudes de un candidato para desempeñar una determinada función, el espíritu con que realiza las tareas y sobre su rendimiento en el servicio, es decir, sobre si merece el nombramiento de funcionario para la función a que aspira.

**5.1.1.2. Poder discrecional de la Administración en la organización de un concurso.**—En la sentencia de 9 de febrero de 1984 (41), ha declarado el Tribunal, como ya había establecido con anterioridad (42), que la autoridad investida del poder de nombramiento dispone de un amplio poder de apreciación para determinar los criterios de capacidad exigidos para los empleos a proveer y para determinar, en función de estos criterios y en interés del servicio, las condiciones y modalidades de organización de un concurso.

**5.1.2. Provisión de un puesto vacante.**—Las disposiciones del estatuto relativas a la provisión de un puesto vacante contemplan garantizar a los candidatos que la autoridad con poder de nombramiento no procederá más que a nombramientos conformes a derecho, observa el Tribunal en sentencia de 1 de diciembre de 1983 (43). Por consiguiente, de dichas disposiciones no resulta que una vez iniciado el procedimiento de reclutamiento, dicha autoridad esté obligada a continuar proveyendo el puesto vacante.

Si el estatuto de funcionarios no impone a la autoridad investida del poder de nombramiento la obligación, una vez empezado el procedimiento de reclutamiento, de llevar a efecto la provisión de un empleo vacante, la regla es, sin embargo, que en materia de procedimiento de provisión a un puesto vacante, la autoridad investida del poder de nombramiento debe efectuar el nombramiento de los seleccionados sobre la base de los resultados del concurso, y no puede apartarse de esta regla más que por serias razones que justifiquen su decisión de una manera clara y completa (44).

(40) As. 290/82, Tréfois/Cour de Justice, Rec. 1983-10, pp. 3751-3779, cdo. 24.

(41) Sentencia de 9 de febrero de 1984, as. 39/83, Fabius/Comisión, Rec. 1984-2, pp. 627-639, cdo. 7.

(42) Sentencia de 16 de octubre de 1975, as. 90/74, Francine Deboeck/Comisión, Rec. 1975, página 1123; sentencia de 18 de febrero de 1982, as. 67/81, Marie Hélène Ruske/Comisión, Rec. 1982, p. 681.

(43) As. 18/83, Morina/Parlement, Rec. 1983-11, pp. 4051-4082, cdo. 9.

(44) Sentencia de 9 de febrero de 1984, as. ac. 316/82 y 40/83, Kohler/Cour des Comptes, Rec. 1984-2, pp. 641-670, cdo. 22.

**5.1.3. Directiva interna de una institución que fija los criterios aplicables.** Una decisión de una institución comunitaria, comunicada al conjunto de su personal y que contempla garantizar a los funcionarios de una misma categoría o grado idénticas condiciones de reclutamiento y desarrollo de su carrera, en lo que se refiere a la determinación del grado y clasificación por categorías en el momento del reclutamiento, constituye en opinión del Tribunal, sentencias de 1 de diciembre de 1983 [45], incluso si no puede ser considerada como una disposición general de ejecución en el sentido del artículo 110 del estatuto de funcionarios, una directiva interna, y, como tal, debe ser considerada como una regla de conducta indicativa que la Administración se impone a sí misma y de la que no se puede apartar sin precisar las razones que la llevan a ello, so pena de infringir el principio de igualdad de trato. Tal directiva interna no puede en ningún caso derogar al estatuto.

**5.1.4. Valoración de la experiencia profesional de un funcionario para su clasificación.**—La autoridad con poder de nombramiento no puede valorar la experiencia profesional anterior de un funcionario, concediéndole al ser reclutado una bonificación de antigüedad en el grado de nombramiento, más que en el caso en que dicha experiencia tenga un nivel apropiado y un carácter especialmente apropiado para su función. Considerando la gran diversidad de experiencias profesionales que presentan los candidatos a la función pública europea, el Tribunal considera, en sentencia de 1 de diciembre de 1983 [46], que hay que reconocer a la autoridad competente un poder de apreciación sobre todos los aspectos que presenta esa experiencia profesional anterior y su relación con las exigencias del puesto a proveer en cada caso concreto.

**5.1.5. Informe final del periodo de prueba («stage»).**—El artículo 34, párrafo 2, del estatuto de funcionarios establece que el informe final del periodo de prueba se establecerá un mes antes de acabar el mismo, para permitir tomar la decisión relativa al nombramiento del funcionario antes de que finalice dicho periodo de prueba, pero un retraso en la elaboración del mismo no perjudica al aspirante a funcionario en periodo de prueba, que no va a ser nombrado funcionario, siempre que se le mantenga en sus funciones y se le siga remunerando mientras dure ese periodo, señala el Tribunal en sentencia de 17 de noviembre de 1983 [47]. Tampoco perjudica al aspirante a funcionario el que como consecuencia de su reclamación por no haber sido nombrado funcionario, se complete con otras observaciones dicho informe final, siempre que se haya seguido un procedimiento contradictorio donde el aspirante haya podido contestar a las críticas que se le hayan formulado.

**5.1.6. Decisión de no nombramiento de un aspirante a funcionario.**—La decisión de no nombrar funcionario a un aspirante es por naturaleza diferente al des-

[45] As. 190/82, Blomefield/Commission, Rec. 1983-11, pp. 3981-4001, cdos. 18 a 21; As. 343/82, Michael/Commission, Rec. 1983-11, pp. 4023-4050, cdos. 13 a 16.

[46] As. 190/82, Blomefield/Commission, Rec. 1983-11, pp. 3981-4001, cdo. 28.

[47] As. 280/82, Tréfois/Cour de Justice, Rec. 1983-10, pp. 3751-3779, cdos. 14 a 16 y 17 a 19.

pido de un funcionario titular, hace notar el Tribunal en sentencia de 17 de noviembre de 1983 (48), ya que en este último caso se impone un examen minucioso de las causas que justifican el fin de una relación laboral establecida, mientras que en el caso de los aspirantes, la decisión sobre sus nombramientos trata sobre el conjunto de elementos positivos y negativos, que puedan hacer el nombramiento de interés para el servicio.

## 5.2. Relación laboral entre la Comunidad y sus funcionarios y agentes

### 5.3. Deberes de la Administración para con el personal a su servicio

**5.3.1. Obligación de motivar sus decisiones.**—La motivación de una decisión lesiva debe permitir al Tribunal ejercer su control sobre su legalidad y dar al interesado todas las indicaciones necesarias para saber si la decisión está o no bien fundada. La exigencia de motivación, precisa el Tribunal en sentencia de 1 de diciembre de 1983 (49), debe ser apreciada, sin embargo, en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que el destinatario pueda tener en recibir explicaciones. Al tratarse en este caso de una medida de reorganización del servicio, la obligación de motivar debe, además, ponerse en relación con el margen de poder discrecional de que goza la autoridad con poder de nombramiento en esta materia.

Por otra parte una decisión que destina a un funcionario a un puesto determinado, satisface la obligación de motivación cuando menciona las razones de este destino, hace notar el Tribunal en sentencia de 12 de enero de 1984 (50), sin que sea necesario indicar por qué el interesado no ha sido destinado a otro puesto o mantenido en el anterior.

### 5.4. Remuneración

**5.4.1. Reajuste de la escala de sueldos.**—El Tribunal, en sentencia de 19 de enero de 1984 (51), estima que el Consejo, al elegir en 1976 un determinado método de adaptación de las remuneraciones de los funcionarios, reguló la incorporación del coeficiente corrector en el baremo de los sueldos de una manera que iba a necesitar una corrección ulterior de ciertas distorsiones, cuya importancia subestimó en esa época, aunque incluyó en su decisión de 1976, una cláusula de revisión para esas distorsiones, por lo que la aplicación de un nuevo cuadro

(48) As. 290/82, Tréfol/Cour de Justice, Rec. 1983-10, pp. 3751-3779, cdo. 25.

(49) As. 18/83, Morina/Parlement, Rec. 1983-11, pp. 4051-4062, cdo. 11.

(50) As. 266/82, Turner/Commission, Rec. 1984-1, pp. 1-17, cdo. 12.

(51) As. 211/80, Advernier/Commission, Rec. 1984-1, pp. 131-164, cdos. 8 a 11; As. ac. 219 y ss/80, André/Commission et Conseil, Rec. 1984-1, pp. 165-176, cdos. 8 a 10; As. 260/80, Andersen/Conseil, Rec. 1984-1, pp. 177-194, cdos. 12 a 15; As. 262/80, Andersen/Parlement, Rec. 1984-1, pp. 195-209, cdos. 12 a 14.

de remuneraciones, en 1980, en aplicación de esa cláusula de revisión, no va contra la política de remuneración fijada en 1976. La aplicación de esta revisión, que resulta en una congelación de los sueldos de determinados funcionarios, tampoco puede considerarse que afecte a sus derechos adquiridos, ya que precisamente se trata de poner fin a aumentos injustificados de dichos sueldos resultantes del baremo anteriormente seguido (52).

**5.4.2. Prestaciones familiares («Allocation de foyer»).**—El Tribunal, en sentencia de 19 de enero de 1984 (53), afirma que el artículo 1, párrafo 2, c), del anexo VII del estatuto de funcionarios, confiere a la autoridad con poder de nombramiento una competencia vinculada en el sentido de que ésta está obligada a tomar la decisión motivada y especial que da derecho a percibir el complemento familiar, desde el momento en que comprueba que se reúnen las condiciones previstas en dicha disposición.

## 5.5. Indemnizaciones y pensiones

**5.5.1. Pensión de invalidez por un acto de altruismo.**—El artículo 78, párrafo 2, debe ser interpretado en el sentido de que no concede el beneficio de una pensión de invalidez en su tipo máximo, a un funcionario que se ve afectado por una invalidez permanente total, como consecuencia de un acto de altruismo realizado por un interés público, pero antes de su entrada al servicio de las Comunidades, precisa el Tribunal en sentencia de 24 de noviembre de 1983 (54).

## 5.6. Otras cuestiones

### 5.6.1. Seguridad Social

**5.6.1.1. Noción de «enfermedad profesional».**—No corresponde al Tribunal estatuir sobre la cuestión de saber si, en un caso concreto, un funcionario ha padecido o no una enfermedad profesional en el sentido del artículo 73 del estatuto de funcionarios. Sin embargo, el Tribunal, en sentencia de 26 de enero de 1984 (55), se declara competente para anular toda decisión adoptada por la autoridad con poder de nombramiento en aplicación de dicha disposición y que sería ilegal por haber sido fundada en una conclusión de una comisión médica desprovista de pertinencia. Tal sería el caso si la comisión médica se basara en una concepción errónea de la noción de «enfermedad profesional» o si su informe no estableciera un vínculo comprensible entre las comprobaciones médicas que supone y las conclusiones a que llegara.

(52) Ibid., cdo. 19; cdo. 14; cdo. 23; cdo. 21.

(53) As. 65/83, Erdini/Conseil, Rec. 1984-1, pp. 211-228, cdo. 19.

(54) As. 342/82, Cohen/Commission, Rec. 1983-10, pp. 3829-3847, cdo. 19.

(55) As. 189/82, Sellar/Conseil, Rec. 1984-1, pp. 229-249, cdo. 15.

**5.6.2. Inclusión de un acto verbal entre los actos susceptibles de recurso.**—En la sentencia de 9 de febrero de 1984 (56), ha declarado el Tribunal que la circunstancia de que una decisión susceptible de recursos pueda revestir un carácter verbal no está excluida, en principio, ni por una disposición de alcance general, ni por las disposiciones especiales del estatuto de funcionarios, en particular sus artículos 90 y 25.

## 6. LIBERTADES COMUNITARIAS

### 6.1. Libre circulación de personas

#### 6.1.1. Cuestiones generales

#### 6.1.2. Seguridad Social

**6.1.2.1. Noción de periodos de seguro.**—El Tribunal afirma (57) que por aplicación del art. 46 del reglamento número 1.408/71 (58) y del artículo 15 del reglamento 574/72 (59) se han de considerar como «periodos de seguro» y no como periodos asimilados, tanto un periodo de trabajo cumplido antes del 1 de enero de 1965 conforme a la legislación holandesa en vigor en esa época, en base a la cual se han abonado cotizaciones como un periodo de trabajo asalariado cumplido en el mismo país antes del 1 de julio de 1967 en base al cual no se ha abonado ninguna cotización.

Y ello porque como ya se dijo (60) la expresión «existente o futura» no debe ser interpretada de tal manera que excluya las disposiciones que habiendo estado anteriormente en vigor, habían dejado de estarlo en el momento de la entrada en vigor del reglamento 1.408/71 y su reglamento de aplicación (61).

**6.1.2.2. Derecho a diversas prestaciones de orfandad.**—Los artículos 77 y 78 del reglamento número 1.408/71 deben ser interpretados en el sentido que el derecho que conceden de una pensión de orfandad en base a la legislación de un Estado miembro competente según sus propias normativas, no anula, cuando el progenitor difunto ha estado protegido por las legislaciones de varios Estados miembros, el derecho a prestaciones de orfandad más elevadas en base a la legislación de uno sólo de esos Estados miembros. Y cuando la cantidad efectivamente percibida en el primer Estado miembro es inferior a las prestaciones previstas por la legislación de ese otro Estado, el huérfano tiene derecho, a cargo

(56) As. ac. 316/82 y 40/83, Kohler/Cour des Comptes, Rec. 1984-2, pp. 641-670, cdos. 9 a 11.

(57) Sentencia de 2 de febrero de 1984, as. 285/82, Rec. 1984-2, pp. 433-458 y parte dispositiva.

(58) Reglamento del Consejo de 14 de junio de 1971 (JOCE, L 149, p. 1).

(59) Reglamento del Consejo de 21 de marzo de 1972 (JOCE, L 74, p. 1).

(60) Sentencia de 9 de junio de 1977, as. 109/76 Blottner, Rec. 1977, p. 1141.

(61) Sentencia de 2 de febrero de 1984, cit., cdo. 15.

de la institución competente de ese otro Estado, a un complemento igual a la diferencia entre las dos prestaciones (62).

Es la doctrina sentada ya anteriormente (63), pues la normativa comunitaria en materia de Seguridad Social no puede privar a los trabajadores emigrantes de los derechos concedidos por un solo Estado miembro.

## 6.2. Libertad de establecimiento

**6.2.1. Veterinarios.**—Un Estado miembro no puede aplicar una sanción penal por ejercicio abusivo de la profesión de veterinario a un ciudadano de otro Estado miembro habilitado en su propio país a ejercer la profesión de veterinario en base a que no está inscrito en el Colegio de Veterinarios del primer Estado miembro, si esta inscripción es rechazada en base a una infracción del Derecho comunitario (64).

La inscripción fue rechazada porque el Estado italiano no había aún incorporado en derecho interno, las directivas pertinentes (65).

## 6.3. Libre prestación de servicios

## 6.4. Libre circulación de mercancías

### 6.4.1. Cuestiones generales

**6.4.1.1. Valor en aduana de las mercancías: Límite.**—Los gastos de cuotas correspondientes a la adquisición de contingentes de exportación, no constituyen parte integrante del valor en aduana de las mercancías importadas de la Comunidad en el sentido de las disposiciones del reglamento número 1.244/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980 (66), relativo al valor en aduana de las mercancías, modificado por el reglamento número 3.193/80 del Consejo de 8 de diciembre de 1980 (67), según ha señalado el Tribunal comunitario en sentencia de 9 de febrero de 1984 (68).

**6.4.1.2. Devolución de tasas nacionales percibidas con violación del Derecho comunitario.**—Declara el Tribunal, que serían incompatibles con el Derecho comunitario todas las modalidades de prueba cuyo efecto es hacer prácticamente imposible o excesivamente de difícil obtención de reembolso de tasas percibidas

[62] Sentencia de 24 de noviembre de 1983, as. 320/82, Rec. 1983-10, pp. 3811-3827 y parte dispositiva.

[63] Sentencia de 9 de junio de 1980, as. 807/79, Gravina, Rec. 1980, p. 2205.

[64] Sentencia de 15 de diciembre de 1983, as. 5/3, Rec. 1983-11, pp. 4233-4250.

[65] Directiva 78/1027 del Consejo de 18 de diciembre de 1978, JOCE, L 362, pp. 1 y 7.

[66] JOCE, L 134, p. 1.

[67] JOCE, L 133, p. 1.

[68] As. 7/83, Rec. 1984-2, pp. 609-625, cdo. 18 y parte dispositiva.

en violación del Derecho comunitario. Tal es el caso principalmente de presunciones o de reglas de prueba que imputan al contribuyente la carga de establecer que las tasas indebidamente pagadas no han sido repercutidas sobre otros sujetos, o limitaciones particulares en lo relativo a la forma de las pruebas a aportar, como la exclusión de cualquier otro modo de prueba distinta a la documental (69).

**6.4.1.3. Reparto de contingentes arancelarios: Condiciones.**—Si el reparto de un contingente arancelario global en cuotas nacionales puede ser compatible con el Tratado en determinadas circunstancias, ha de serlo con la condición expresa de que no impida o atente contra la libre circulación de los productos que forman el contingente después de haber sido admitidos a la libre práctica en el territorio de un Estado miembro.

Si una disposición implicara la no reexportación de tales productos en libre práctica de un Estado miembro hacia otros Estados miembros, se estaría violando las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías.

En base a estas consideraciones, en la sentencia de 13 de diciembre de 1983 (70) el Tribunal señala que la disposición del artículo 4.2 del reglamento del Consejo 1.699/82 (71) es conforme al Tratado al no imponer al Reino Unido la obligación de limitar las exportaciones de ron a los otros Estados miembros sino sólo la de asegurar que las cantidades importadas se limiten a las que respondan a las necesidades del consumo interno.

**6.4.1.4. Reembolso o descuento de los derechos a la importación o exportación.** En la sentencia de 15 de diciembre de 1983 (72), ha señalado el Tribunal, que el artículo 13 del reglamento número 1.430/79 del Consejo, relativo al reembolso o descuento de los derechos a la importación o exportación (73), aparece a la luz de los considerandos del reglamento como una cláusula general de equidad destinada a cubrir situaciones distintas que las que eran más corrientemente comprobadas en la práctica y que podían, en el momento de la adopción del reglamento, ser objeto de una reglamentación particular. Como lo demuestran las condiciones a las que deben satisfacer las partes que quieran obtener el beneficio de los artículos 3 y 4 (reembolso o descuento), estas disposiciones no han sido aparentemente redactadas para una situación particular.

**6.4.1.5. Naturaleza y licitud de las tasas compensatorias.**—En la decisión prejudicial de 31 de enero de 1984 (74) ha expuesto el Tribunal su doctrina sobre las tasas sanitarias impuestas por un Estado miembro sobre carnes frescas importadas de países terceros, señalando que si las mercancías provenieran de otros Estados miembros, tales detracciones pecuniarias deberían, en principio,

(69) Ibid., cdo. 14.

(70) As. 218/82, R Comisión/Consejo, Rec. 1983-11, pp. 4063-4082, cdos. 1 a 17.

(71) De 24 de junio de 1982. JOCE, núm. L 189, 1983, p. 1.

(72) As. 283/82, Schoellershammer/Comisión, Rec. 1983-11, pp. 4219-4232, cdo. 7.

(73) JOCE, núm. L 175, de 12-7-1979, p. 1.

(74) As. 1/83, I.F.G., Rec. 1984-1, pp. 349-376, cdos. 8 a 11.



ser calificadas de gravámenes de efectos equivalentes a derechos de aduana y, por ello, deben considerarse prohibidas en razón de que suponen un obstáculo a los intercambios intracomunitarios (75).

Sin embargo, prosigue el Tribunal, la razón de ser de tal prohibición desaparece cuando la percepción de tasas por controles sanitarios queda autorizada por disposiciones comunitarias adoptadas en interés de la libre circulación de las mercancías, en especial, cuando se permite la ejecución de controles sanitarios en el Estado de origen de aquéllas con efectos para toda la Comunidad.

El Tribunal ha reconocido, en estos casos, la compatibilidad de las normas comunes relativas a la percepción de estos gravámenes con las reglas del Tratado, siempre que éstas se encuentren en una relación adecuada con el coste real de los controles (76).

Finalmente, el Tribunal ha reconocido que los controles sanitarios sobre las mercancías importadas de países terceros se llevan a cabo en un contexto de hecho y de derecho distinto del de los operados sobre las mercancías de origen comunitario y que en este contexto, la percepción de tasas por controles sanitarios por los Estados miembros no debe considerarse prohibida, en principio, siempre que exista una relación adecuada entre la cuantía de la tasa y el coste real de los controles (77).

**6.4.1.6. Límites a la percepción de tasas por los Estados miembros.**—En sentencia de 31 de enero de 1984 (78) ha indicado el Tribunal que la respuesta que ha de dar al juez nacional, debe poner a éste en condiciones de poder adoptar una posición sobre los argumentos obtenidos en las sentencias del Tribunal comunitario. Ha señalado el juez comunitario que en el contexto de la sentencia de referencia, aun reconociendo el Tribunal que los Estados miembros, dentro de ciertas condiciones, pueden percibir detracciones pecuniarías por la realización de controles sanitarios a la importación de carne procedente de países terceros y ha puesto de relieve, sin embargo, que tales detracciones deben contenerse dentro de unos límites, de manera que no ocasionen distorsiones de la competencia o desviaciones de tráfico en el Mercado Común. Tales efectos se evitan cuando las detracciones por controles sanitarios no exceden de los costos reales de los mismos.

De estas consideraciones concluye el Tribunal, no cabe deducir que la percepción de cantidades por controles sanitarios de productos cárnicos procedentes

(75) Vid. sentencia de 14 de diciembre de 1972, *Marlimes*, as. 29/72, Rec. 1972, p. 1309; sentencia de 11 de octubre de 1973, *Rewa*, as. 39/73, Rec. 1973, p. 1039; sentencia de 31 de mayo de 1979, *Dankavit Loire*, as. 132/72, Rec. 1979, p. 1923; sentencia de 7 de abril de 1981, *United Food*, as. 132/80, Rec. 1981, p. 995.

(76) Vid. Sentencia de 25 de enero de 1977, *Bauhuis*, as. 46/76, Rec. 1977, p. 5; sentencia de 12 de julio de 1977, *Commission/Pays-Bas*, as. 89/76, Rec. 1977, p. 1355, citadas por el Tribunal.

(77) Vid. sentencia de 28 de junio de 1978, *Simmenthal*, as. 70/77, Rec. 1978, p. 1453; sentencia de 5 de julio de 1978, *Ludwig*, as. 138/77, Rec. 1978, p. 1645; sentencia de 22 de enero de 1980, *Wigel*, as. 30/79, Rec. 1980, p. 151; sentencia de 22 de marzo de 1983, *Lionelli*, as. 88/82, Rec. 1983, p. 1061.

(78) As. 1/83, I.F.G. Rec. 1984-I, pp. 349-376, cdos. 20 a 22 y parte dispositiva.

de países terceros no se subordina a la prueba de que tasas idénticas o comparables sean exigidas en todos los Estados miembros, si existe una proporción o correspondencia justa entre la cuantía de la tasa y los costos de los controles.

**6.4.1.7. Régimen de licencias de importación: protección de la salud de los animales.**—En las sentencias de 31 de enero de 1984 (79), ha declarado el Tribunal, que la respuesta a la cuestión de saber si las medidas nacionales dirigidas a la salud de los animales pueden suponer o no un régimen de licencias de importación sin violar el artículo 36 del Tratado CEE, es función de la relación que existe en un caso concreto entre, de una parte, el perjuicio ocasionado por las cargas administrativas y financieras que implica tal régimen y, de otra parte, por los peligros y riesgos para la salud animal que suponen las importaciones en cuestión.

**6.4.1.8. Criterios para la concesión de restituciones a la exportación.**—La apreciación de lo que deba considerarse como carne de poco valor a los fines de aplicar restituciones a la exportación, de las que quedan excluidas estas carnes varía grandemente de un Estado miembro a otro.

El carácter esencial de las porciones de carne bovina, no depende de un porcentaje fijo de otro tipo de carne que en aquéllas se contenga, sino que ha de determinarse conforme a los hábitos de los consumidores y del comercio y según los métodos utilizados para descuartizar y desosar la carne bovina en cada región de un Estado miembro.

El Tribunal, en la sentencia de 18 de enero de 1984 (80), ha dicho que el reglamento 2.787/81 ha de interpretarse en el sentido de que las restituciones a la exportación de carne bovina serán debidas a las porciones de carne que contengan un porcentaje de falda, siempre que esta última parte no confiera al conjunto su carácter esencial, habida cuenta de los hábitos de los consumidores y el comercio y según los métodos normalmente utilizados para descuartizar y desosar la carne bovina en cada Estado miembro o la región en que tenga lugar.

**6.4.1.9. Eliminación de productos usados: Régimen.**—En sentencia de 9 de febrero de 1984 (81), el Tribunal Comunitario ha establecido que los objetivos de la directiva 75/439 del Consejo, de 16 de junio de 1975 (82), concerniente a la eliminación de aceites usados, y de las reglas del tratado de la CEE sobre la libre circulación de mercancías, exigen que los aceites usados puedan ser entregados a un eliminador de otro Estado miembro que haya obtenido en ese Estado miembro la autorización prevista en el artículo 6 de la directiva, tanto por la mediación de un almacenista como por la de un recolector asociado.

---

(79) As. 40/82, Comisión/Reino Unido, Rec. 1984-1, pp. 283-316, cdo. 25; as. 74/82, Comisión/Irlanda, Rec. 1984-1, pp. 317-348, cdo. 51.

(80) As. 327/82, EKRO, Rec. 1984-1, pp. 107-130, cdos. 17 a 25 y parte dispositiva.

(81) As. 295/82, Rec. 1984-2, pp. 575-589, cdo. 10 y parte dispositiva.

(82) JOCE, L 194, p. 23.

## 6.4.2. Cuestiones arancelarias

**6.4.2.1. Franquicia aduanera: Justificación.**—En el caso de autos, el Tribunal comunitario ha mantenido que la franquicia aduanera sólo puede otorgarse al material que posee características objetivas que le hacen especialmente propio para la investigación científica pura, esto es, para un material que según su propia estructura técnica y su funcionamiento, sirve por sí mismo y directamente como medio de investigación científica. Por el contrario, un material que no sirve como medio, sino como objeto de investigación científica, no podría ser calificado de instrumento o aparato científico (83).

## 6.4.2.2. Origen de la mercancía

**Función del reglamento 964/71 de la Comisión.**—El reglamento número 964/71 de la Comisión, de 10 de mayo de 1971 (84), referente a la determinación del origen de las carnes y despojos frescos, refrigerados o congelados, de algunos animales de especies domésticas, sólo tiene por efecto excluir las operaciones de transformación de la carne posteriormente a la matanza que puedan conferir a la carne el origen del país en que estas operaciones tienen lugar (85).

**Lugar.**—El artículo 5 del reglamento número 802/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968 (86), debe interpretarse en el sentido de que el hecho de quitar huesos, nervios, grasas, cortar en trozos y empaquetar al vacío la carne procedente de cuartos de bueyes no confiare a ésta el origen del país donde estas operaciones han tenido lugar (87).

En este mismo sentido ha precisado (88) el Tribunal comunitario lo que ya dijese con ocasión de su sentencia de 26 de enero de 1977 (89), esto es, que la última transformación o elaboración contemplada por el artículo 5 del reglamento número 802/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, que establece la organización común de mercados en el sector de la carne bovina (90), sólo es «substancial», en el sentido de esta disposición, cuando el producto que resulta de ella presenta propiedades y una composición específica propias que no poseía antes de esta transformación o elaboración. Las operaciones que afectan a la presentación de un producto al objeto de su utilización, pero que no entrañan una modificación cualitativa importante de sus propiedades, no son susceptibles de determinar el origen del referido producto.

(83) Sentencia de 26 de enero de 1984, as. 45/83, Rec. 1984-1, pp. 267-281, cdo. 10 a 11.

(84) JOCE, L 104, p. 12.

(85) Sentencia de 23 de febrero de 1984, as. 93/83, Rec. 1984-2, pp. 1095-1110, cdo. 9 y parte dispositiva.

(86) JOCE, L 77, p. 14.

(87) Sentencia de 23 de febrero de 1984, as. 93/83, Rec. 1984-2, pp. 1095-1110, cdo. 15 y parte dispositiva.

(88) Sentencia de 23 de febrero de 1984, as. 93/83, Rec. 1984-2, pp. 1095-1110, cdo. 13.

(89) As. 49/76, Rec. p. 41.

(90) JOCE, L 77, p. 14.

**6.4.2.3. Conjunto no considerable como mercancía unitaria.**—Un producto que en el momento de la importación se compone de varios elementos embalados separadamente en un mismo cartón, a saber una calculadora de oficina de uso común con impresora y pantalla numérica luminosa de doce cifras (que permite efectuar adiciones, multiplicaciones, sustracciones, divisiones, cálculos de porcentaje, extracciones de raíces y cálculos con una constante), una gaveta de acero con cierre a llave y con compartimentos de material plástico para el numerario así como accesorios (cable eléctrico, rollo doble de papel, funda guarda-polvo), no puede ser considerado como una unidad funcional ni, por consiguiente, como una mercancía unitaria en el sentido de una caja registradora encuadrable en la sub-partida 84.52 B del Arancel común. El conjunto de estos artículos debe ser considerado como una mercancía presentada en conjunto en el sentido de la regla general de interpretación 3b del Arancel común, cuya clasificación arancelaria se efectúa según el artículo que le confiere su carácter esencial (91).

**6.4.2.4. Objetos no susceptibles de interpretación restrictiva.**—Con ocasión del asunto 300/82 (92), el Tribunal de Justicia ha mantenido que dado que, según el primer considerando del reglamento número 1.798/75 del Consejo, de 10 de julio de 1975 (93), los objetos de carácter educativo, científico o cultural son admitidos con exención de los derechos de aduana «instrumento científico», según el sentido del artículo 3.1, de dicho reglamento, no podría recibir una interpretación restrictiva sino que, por el contrario, puede cubrir materiales fabricados en base a descubrimientos científicos y que sirvan no como objetos sino como medios de la investigación científica. Por consiguiente, ha concluido, el Tribunal, la noción de instrumento científico, contemplada por el artículo 3 del citado reglamento, debe ser interpretada en el sentido de que la misma pueda ser también un material consistente en bloques de materia plástica destinado a la investigación en el campo de las radiaciones, en tanto que este material cumple una función esencial como medio indispensable para llegar a ciertos resultados de investigación científica a largo plazo.

**6.4.2.5. Criterios de interpretación arancelaria.**—A falta de disposiciones comunitarias que expliquen las nociones que figuran en el anejo II del Tratado CEE, ha manifestado el Tribunal en la sentencia de 29 de febrero de 1984 (94), habida cuenta de que en el mismo se reproducen exactamente algunas partidas y sub-partidas del arancel común, se impone que, para la interpretación de las nociones contenidas en el citado anejo convendrá referirse a las interpretaciones ya cristalizadas y a los métodos de interpretación ya consagrados relativos al arancel común.

(91) Sentencia de 9 de febrero de 1984, as. 60/83, Rec. 1984-2, pp. 671-688, cdos. 10 y 15 y parte dispositiva.

(92) Sentencia de 9 de noviembre de 1983, as. 158/82, Rec. 1983-10, pp. 3573-3594, cdos. 9, 12 y 13 y parte dispositiva.

(93) JOCE, L 184, p. 1.

(94) As. 77/83, CILFIT/Ministero della Sanità, Rec. 1984-2, pp. 1257-1270, cdos. 6 y 7.

**6.4.2.6. Criterio de clasificación arancelaria.**—Es imposible, en el estado actual de la ciencia, indicar si el criterio de la concentración puede siempre, por sí solo, bastar para considerar que una preparación vitaminada constituye un medicamento, ni *a fortiori* precisar a partir de qué grado de concentración tal preparación vitaminada respondería a la definición comunitaria de medicamento que resulta de la directiva 65/65 relativa a las especialidades farmacéuticas. Por consiguiente, la calificación de una vitamina como medicamento, en el sentido de la segunda definición de la mencionada directiva, debe efectuarse, caso por caso, en atención a las propiedades farmacológicas de cada una de ellas, tal y como las mismas están establecidas en el estado actual del conocimiento científico (95).

**6.4.2.7. Clasificación arancelaria: Supuestos.**—El inciso primero del artículo 3, 1 del reglamento número 1.798/75 (96), debe ser interpretado en el sentido de que el mismo sólo comprende recipientes destinados a conservar, almacenar o cultivar una sustancia sobre la cual se investiga y que sólo juegan un papel pasivo en el desarrollo de la investigación científica (97).

En la sentencia de 29 de febrero de 1984 (98) ha dicho el Tribunal que la expresión «ex 01.15 B, productos de origen animal no nombrados ni comprendidos en otra parte» (del arancel común) que figura en el anejo del reglamento del Consejo número 827/68 (99) que establece la organización común de mercados para ciertos productos que se enumeran en el anejo II del Tratado CEE, no comprende a las lanas.

Basa su razonamiento el juez comunitario en el hecho de que en el arancel común se excluyen las lanas de dicha partida y el anejo II del Tratado CEE reproduce las partidas y subpartidas de aquel arancel y el citado reglamento retoma, a su vez, el contenido del anejo II del Tratado CEE, por lo que han de tener todas las expresiones el mismo contenido y alcance.

Un aceite animal totalmente hidrogenado, fabricado a partir de hígado de pescado, que es al mismo tiempo un hidrocarburo cíclico, debe ser clasificado en la sub-partida 29.01 A del Arancel común. Ahora bien, en ausencia de la autorización prevista por el reglamento número 1.775/77 (100) de la Comisión, de 4 de julio de 1977, que determina las condiciones a las que se subordina la admisión de algunas mercancías al beneficio de un régimen arancelario favorable en razón de su destino particular, tal producto no puede ser clasificado en la sub-partida arancelaria 19.01 AII, sino en la 29.01 AI (101).

(95) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdos. 28 y 29 y parte dispositiva.

(96) Reglamento del Consejo de 10 de julio de 1975, JOCE, L 184, p. 1.

(97) Sentencia de 26 de enero de 1984, as. 45/83, Rec. 1984-1, pp. 267-281.

(98) As. 77/83, CILFIT/Ministero della Sanità, Rec. 1984-2, pp. 1257-1270, cdos. 8 a 13 y parte dispositiva.

(99) JOCE, núm. L 151 de 1968, p. 16.

(100) JOCE, L 195, p. 5.

(101) Sentencia de 16 de febrero de 1984, as. 46/83, Rec. 1984-2, pp. 841-858, cdos. 13, 16, 18, 19 y parte dispositiva.

## JURISPRUDENCIA

Sustancias tales como los preparados vitaminados que no estén «descritos o recomendados» expresamente como propios para curar, cuidar o prevenir una afección, pueden sin embargo, ser sustancias «presentadas como en posesión de propiedades curativas o preventivas respecto de enfermedades humanas o animales» en el sentido de la primera parte de la definición comunitaria del medicamento que resulta de la directiva 65/65 del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a las especialidades farmacéuticas (102). En este sentido, ha precisado el Tribunal que una sustancia que posee «propiedades curativas o preventivas respecto de enfermedades humanas o animales» y que sin embargo no es «presentada» como tal, entra, en principio, en el campo de aplicación de la segunda parte de la definición comunitaria de medicamento, en cuyos términos toda sustancia o composición que pueda ser administrada al hombre o al animal a fin de establecer un diagnóstico médico o restaurar, corregir o modificar las funciones orgánicas en el hombre o en el animal, está igualmente considerada como medicamento. En consecuencia, el Tribunal ha concluido que un producto que no responde ni a la primera ni a la segunda parte de la definición comunitaria de medicamento según la directiva 65/65, no puede ser considerado como medicamento en el sentido de esta directiva (103).

### 6.4.3. Ayudas de Estado

### 6.4.4. Otras medidas nacionales

#### 6.4.4.1. Medidas nacionales

**Protectoras de la salud y la vida.**—En virtud de una constante jurisprudencia, el Tribunal comunitario, en la medida en que subsisten en el estado actual de la investigación científica, corresponde a los Estados miembros, en defecto de armonización, decidir sobre el nivel al que pretenden asegurar la protección de la salud y la vida de las personas, teniendo en cuenta las exigencias de la libre circulación de las mercancías en el interior de la Comunidad. Corresponde, en este sentido, a las autoridades nacionales demostrar, en cada caso, que su reglamentación es necesaria para proteger efectivamente los intereses contemplados por el artículo 36 del tratado de la CEE y particularmente que la comercialización del producto en cuestión presenta un riesgo serio para la salud pública (104).

En ausencia de armonización suficiente a nivel comunitario, los Estados miembros tienen el derecho de adoptar las disposiciones apropiadas con vistas a garantizar en su territorio la protección de la salud pública. Sin embargo, tales medidas sólo están justificadas a condición que se establezca que las mismas son necesarias a los fines de asegurar el objetivo de protección de la salud pública

(102) JOCE de 9 de febrero de 1965, p. 369.

(103) Sentencia de 30 de noviembre de 1982, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdos. 20, 21 y 23 y parte dispositiva.

(104) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdos. 27 y 40.

contemplado por el artículo 36 del tratado de la CEE, y que este objetivo no pueda ser realizado por medios menos restrictivos de los intercambios en el interior de la Comunidad (105).

**Dirigidas a mejorar la calidad de la producción nacional.**—El artículo 30 del tratado de la CEE no se opone a la adopción de reglas nacionales que, sin afectar a los productos importados, tengan por objeto mejorar la calidad de la producción nacional a fin de hacerla más atractiva para los consumidores. Semejante medida es, en efecto, conforme con la exigencia de una competencia sana, leal, querida por el tratado (106).

En este mismo orden de cosas, el Tribunal de Justicia (107) ha señalado que conviene tener en cuenta que el artículo 34 del tratado de la CEE no constituye obstáculo para una regla de derecho nacional que obligue a los productores a fijar una marca de control que atestigüe la conformidad con las reglas nacionales de calidad, desde el momento en que esta obligación concierne indistintamente a la producción nacional comercializada en el Estado miembro concernido y la destinada a la exportación. Tampoco constituye este artículo un obstáculo para una regla nacional que prevea efectuar sondeos sobre todos los productos queseros destinados al consumo exterior o a la exportación, por un organismo de control que emita a continuación, un documento atestiguando el resultado de ese control.

Por lo demás el reglamento número 804/68 debe ser interpretado en el sentido de que el mismo no impide a un Estado miembro obligar a los productores de queso a afiliarse a un organismo de control con tal que los objetivos de este organismo sean conformes al derecho comunitario y que la comercialización, la reventa, la importación y la exportación de productos queseros no sea exclusivamente reservada a las personas afiliadas a tal organismo (108).

**Reguladores del consumo: Procedencia.**—El Tribunal comunitario ha señalado en sentencia de 7 de febrero de 1984 (109) que el derecho comunitario no atenta a la competencia de los Estados miembros para ordenar sus sistemas de seguridad social y para adoptar, en particular, disposiciones destinadas a regular el consumo de productos farmacéuticos en interés del equilibrio financiero de sus regímenes de seguro de las atenciones de salud.

**De represión de infracciones: Procedencia.** En la medida en que ni se ha establecido ni sostenido que una prohibición de importar pastas conteniendo trigo blando, sea contraria al derecho comunitario, no se podría considerar que las prácticas administrativas o judiciales de represión de las infracciones de esta prohibición tengan su base en el derecho comunitario, al menos en ausencia de trato discriminatorio respecto de las importaciones (110).

(105) Sentencia de 28 de febrero de 1984, as. 247/81, Rec. 1984-2, pp. 1111-1128, cdo. 7.

(106) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/84, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdo. 20 y parte dispositiva.

(107) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/84, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdos. 25 y 26 y parte dispositiva.

(108) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/84, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdo. 37 y parte dispositiva.

(109) As. 238/12, Rec. 1984-2, pp. 523-555, cdo. 16.

(110) Sentencia de 21 de febrero de 1984, as. 202/82, Rec. 1984-2, pp. 933-949, cdo. 9.

**Que limitan la comercialización: Improcedencia.**—Sólo cuando por aplicación del artículo 100 del tratado de la CEE, las directivas comunitarias prevén la armonización completa de todas las medidas, necesarias para asegurar la protección de la salud de animales y personas y ordenan procedimientos comunitarios de control de su observación, es cuando el recurrir al artículo 36 del mismo tratado deja de estar justificado. Ahora bien, tal no es el caso de las directivas relativas a los productos farmacéuticos. Por consiguiente, ha declarado el Tribunal comunitario en el caso de autos, que hay lugar a examinar si las medidas que limitan la comercialización de vitaminas pueden estar justificadas por el artículo 36 citado (111).

**Que entorpecen la competencia.**—El artículo 30 del Tratado de la CEE se opone a la introducción, por un Estado miembro, en lo que concierne a los productos farmacéuticos importados, de una reglamentación que haga referencia a los precios franco-fábrica habitualmente practicados por los productos destinados al consumo en el territorio del Estado miembro donde la producción tiene lugar, cuando la reglamentación aplicable a la producción nacional se base en una simple consideración del nivel de los precios en una cierta fecha. Tal situación puede, en efecto, perjudicar la salida de los productos importados haciéndola más difícil o incluso imposible o, en todo caso, menos beneficiosa que la de los productos nacionales, cada vez que el nivel de precios al que se remite, para los productos de otros Estados miembros la reglamentación del Estado miembro de importación, sea inferior al aplicable a los productos de este Estado (112).

**Equivalentes a restricciones cuantitativas.**—El artículo 30 del tratado de la CEE prohíbe, en el comercio entre Estados miembros, cualquier medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. Según una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia se consideran como tales todas las medidas que son susceptibles de entorpecer, directa o indirectamente, actual o potencialmente, los intercambios entre Estados miembros. El Tribunal, que ha tenido ocasión de aplicar reiteradamente (113) estos principios a regímenes de reglamentación de precios indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los productos importados, ha comprobado que tales regímenes no constituyen, en sí mismos, medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, pero pueden producir este efecto cuando los precios se sitúan a un nivel tal que la salida de los productos importados viene a ser bien imposible, bien más difícil que la de los productos nacionales (114).

Según los términos del artículo 30 del tratado de la CEE, están prohibidas en el comercio entre Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación así como cualquier medida de efecto equivalente. Según una constante

(111) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdo. 35.

(112) Sentencia de 29 de noviembre de 1983, as. 181/82, Rec. 1983-10, pp. 3849-3881, cdos. 25 y 23 y parte dispositiva.

(113) Cfr. Sentencias de 26 de febrero de 1976, as. 62/75 y Asuntos 88 a 90/75, Rec., p. 291 y Rec., p. 323 respectivamente. Sentencia de 21 de enero de 1978, as. 82/77, Rec., p. 25. Sentencia de 8 de noviembre de 1979, Asuntos 16 a 20/79, Rec., p. 3327.

(114) Sentencia de 29 de noviembre de 1983, as. 181/82, Rec. 1983-10, pp. 3849-3881, cdo. 16.



jurisprudencia del Tribunal comunitario, se considera como medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, cualquier reglamentación mercantil de los Estados miembros susceptible de entorpecer directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitario. Desde esta perspectiva es evidente que constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa en el sentido del citado artículo, una reglamentación que prohíba, salvo registro administrativo previo, la comercialización de vitaminas y de preparaciones vitamínicas dado que tal medida es susceptible de entorpecer el comercio entre Estados miembros (115).

De una jurisprudencia constante del Tribunal resulta que toda reglamentación comercial de los Estados susceptible de entorpecer directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitario, es considerada como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. El Tribunal considera a este respecto que la disposición nacional en litigio (que reserva la comercialización de medicamentos a las empresas farmacéuticas que tengan su sede en su Estado) es susceptible de entrañar gastos suplementarios para las empresas que no estiman útil tener un representante propio en el territorio de ese Estado, a fin de promover sus exportaciones hacia el mismo, y que, venden directamente a muchos clientes. La disposición en litigio es, pues, susceptible de entorpecer el comercio intracomunitario y particularmente las importaciones paralelas, y debe ser considerada como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, prohibida por el artículo 30 del tratado de la CEE y no justificada por razones de protección de la salud pública en el sentido del artículo 36 del mismo tratado (116).

En el artículo 34 del tratado de la CEE se contemplan las medidas nacionales que tienen por objeto o por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer así una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, a fin de asegurar una ventaja particular a la producción nacional o el mercado interior del Estado interesado, según ha señalado el Tribunal en sentencia de 7 de febrero de 1984 (117).

**Restricciones específicas de la exportación.**—Como ya mantuvo el Tribunal de Justicia en sentencia de 8 de noviembre de 1979 (118), el artículo 34 contempla las medidas nacionales que tienen por objeto o por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer así una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, de forma que se asegure una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior del Estado interesado (119).

(115) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdos. 32 y 33.

(116) Sentencia de 28 de febrero de 1984, as. 247/81, Rec. 1984-2, pp. 1111-1128, cdos. 4 y 7 y parte dispositiva.

(117) As. 237/84, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdo. 22.

(118) As. 15/79, Rec., p. 3409.

(119) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 238/12, Rec. 1984-2, pp. 523-555, cdo. 25.

## Protectoras de productos: su apreciación y compensación

**Función del artículo 46 del Tratado CEE.**—El artículo 46 del Tratado CEE, no pierde su razón de ser aun cuando otras disposiciones del Tratado permitan paliar las distorsiones de la competencia en el dominio agrario, pues esta disposición hace posible, cuando una organización del mercado de un producto agrícola con condiciones armoniosas de competencia no ha sido establecida, compensar los desequilibrios ocasionados por medidas nacionales de sostenimiento del mercado, en unos plazos de tiempo muy cortos.

La sentencia de 22 de febrero de 1984 (120) sostiene que la necesidad de tales mecanismos reside sólo en la perturbación de la competencia producida por las medidas nacionales, cualquiera sea la apreciación que pueda hacerse de las medidas nacionales causantes de la perturbación.

Incumbe a la Comisión, con el control del Tribunal, apreciar únicamente en los términos del artículo 46 si las medidas de un Estado miembro pueden afectar a la competencia de un producto similar de otro Estado miembro para justificar la instauración de un gravamen compensatorio en el Estado miembro perjudicado por aquellas medidas, que reinstaure la igualdad de condiciones inherentes a un Mercado Común.

**6.4.4.2. Disposiciones nacionales compatibles con el artículo 30 CEE: Requisitos.** Las disposiciones adoptadas en el marco de un sistema nacional de seguro obligatorio de las atenciones de la salud, que tiene por objeto rehusar a los asegurados el derecho a la percepción, con cargo al organismo del seguro, de medicamentos especialmente designados, son compatibles con el artículo 30 del Tratado de la CEE si la determinación de los medicamentos excluidos tiene lugar sin discriminación en lo que concierne al origen de los productos, según criterios objetivos y controlables, tales como la existencia, en el mercado, de otros productos con el mismo efecto terapéutico, pero menos costoso; que se trate de productos libremente comercializados fuera de toda prescripción médica, o productos descartados del reembolso por motivos de naturaleza fármaco-terapéutica justificados por la salvaguardia de la salud pública, a condición que sea posible enmendar las listas cada vez que lo exija el respeto a los criterios previstos (121).

Igualmente ha mantenido el Tribunal en el asunto 283/12 (122) que el artículo 5 del Tratado CEE y las directivas 65/65 (123) y 75/319 (124) ambas del Consejo referentes a las especialidades farmacéuticas no se oponen a las disposiciones adoptadas en el marco de un sistema nacional de seguro obligatorio de las atenciones de la salud, que tengan por objeto denegar a los asegurados el derecho

(120) As. 337/82, St. Nikolaus Brunnersl, Rec. 1984-2, pp. 1051-1074, cdo. 16.

(121) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 238/12, Rec. 1984-2, pp. 523-555, cdo. 22 y parte dispositiva.

(122) Sentencia de 7 de febrero de 1984, Rec. 1984-2, pp. 523-555, cdos. 5, 27, 28 y parte dispositiva.

(123) Directiva de 26 de enero de 1965, JOCE, núm. 22 de 1965, p. 369.

(124) Directiva de 20 de mayo de 1975, JOCE, L 147, p. 13.

a la percepción, con cargo al organismo del seguro, de medicamentos especialmente designados. Y ello es así porque tal sistema no afecta al acceso al mercado en el sentido de las directivas citadas y, porta parte, la validez de las autorizaciones otorgadas en virtud de esta directiva no se encuentra por ello en discusión.

**6.4.4.3. Disposiciones nacionales complementarias: Condiciones para su adopción.**—En el caso en el que algunas preparaciones vitaminadas o polivitaminadas, puedan ser consideradas como medicamentos en el sentido de la directiva 65/65 (125), pero no estén englobadas en la legislación sobre medicamentos de uno o más Estados miembros, o no estén englobadas en la definición comunitaria de medicamento, la ley de un Estado miembro puede impedir la venta o la retención en almacén con vistas a su distribución de tales preparaciones importadas de otro Estado miembro, particularmente cuando éstas no están presentadas en una forma farmacéutica o posean su grado de concentración elevado. Sin embargo, tal reglamentación sólo está justificada cuando se acuerdan autorizaciones de comercializar siendo las mismas compatibles con las necesidades de la protección de la salud (126).

**6.4.4.4. Procedencia de medidas nacionales en ausencia de reglas comunitarias.**—En ausencia de regla comunitaria sobre la calidad de los productos queseros, el Tribunal estima que los Estados miembros conservan el poder de imponer tales reglas a los productores de quesos establecidos en su territorio. Este poder se extiende no sólo a las reglas consideradas como necesarias para la protección del consumidor o de la salud pública, sino también a las reglas que el Estado miembro desee promulgar a fin de promover la calidad de la producción nacional. Estas reglas no podrán, sin embargo, crear discriminación en detrimento de los productos importados, ni entorpecer la importación de productos procedentes de otros Estados miembros. Por otra parte, dado el aspecto muy limitado de las medidas comunitarias para el sostenimiento del mercado en el sector del queso, no es incompatible con estas el adoptar medidas nacionales de calidad que comporten una prohibición de producir quesos de tipo o de calidad distintos de los previstos por la reglamentación nacional (127).

**6.4.4.5. Acuerdos que pueden afectar el comercio sectorial entre Estados miembros.**—En su sentencia de 8 de noviembre de 1983 (128), el Tribunal establece que un acuerdo entre empresas que tiene como finalidad tratar de restringir de una forma apreciable las importaciones paralelas en Bélgica de lavadoras y lavavajillas, tendiendo a aislar al mercado belga de forma incompatible con los principios del mercado común, y que se funda en la elección de un sistema único

(125) Directiva del Consejo de 26 de enero de 1965 relativa a las especialidades farmacéuticas. JOCE de 9 de febrero de 1965, p. 369.

(126) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, As. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdo. 41 y parte dispositiva.

(127) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/84, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdos. 13, 14 y parte dispositiva.

(128) Asuntos acumulados 98-102, 104, 105, 108 y 110/82, Rec. 1983-10, pp. 3369-3430, cdos. 24 a 35.

de control de etiquetas de conformidad que sólo pueden obtener los fabricantes y los importadores exclusivos, buscando un trato de favor para los miembros de las asociaciones que forman parte del acuerdo y considerando al mismo como un arma contra importaciones paralelas, tiene como objeto restringir, sensiblemente el juego de la competencia en el interior del mercado común, a pesar del hecho de tener también como objeto la protección de la salud pública y la reducción del costo del control de conformidad.

El Tribunal considera que tal acuerdo afecta a la importación en un sector del comercio de un país del mercado común de una forma que no se puede considerar irrelevante y que, por tanto, no se puede beneficiar de la exención prevista en el artículo 85, 3.º, del Tratado.

**6.4.4.6. Gravámenes interiores: Falta de criterio suficiente y objetivo.**—En la sentencia de 9 de noviembre de 1983, el Tribunal comunitario ha mantenido que la distinción establecida por una legislación nacional entre un control sanitario general que sostienen los contribuyentes, y controles sanitarios llamados particulares, cuyos gastos de análisis de ciertos productos alimenticios están a cargo de las empresas concernidas, no constituye, en sí misma, un criterio suficientemente preciso ni sobre todo, objetivo para basar en el mismo un sistema general de impuestos interiores en el sentido del artículo 95 del Tratado de la CEE (129).

**6.4.4.7. Gravamen de efecto equivalente a un derecho de aduana: Caracterización.**—Según jurisprudencia constante del Tribunal comunitario, toda carga pecuniaria, unilateralmente impuesta, cualesquiera sean su denominación y su técnica, y que grave las mercancías por razón de su paso por la frontera, cuando la misma no es un derecho de aduana propiamente dicho, constituye un gravamen de efecto equivalente en el sentido de los artículos 9, 12, 13 y 16, del Tratado, incluso cuando no fuese percibida en beneficio del Estado. No se da este supuesto si la carga en cuestión constituye la remuneración de un servicio o si la carga es consecuencia de un sistema de impuesto interior detraída sistemáticamente, según los mismos criterios, por los productos nacionales y los productos importados y exportados (130).

**6.4.4.8. Imposición interior no asimilable a un gravamen.**—Según jurisprudencia constante del Tribunal comunitario, una carga que grave la importación no constituye una imposición, en los términos del artículo 95 del Tratado de la CEE, más que si forma parte de un sistema general que afecte sistemáticamente a categorías de productos según criterios objetivos aplicados independientemente del origen de los productos. En efecto, una carga que grava un producto importado de otro Estado miembro, cuando no existe incluso producto nacional idéntico o similar, no constituye por ese solo hecho un gravamen de efecto equivalente, y puede constituir una imposición interior en el sentido del citado artículo 95 si

(129) As. 158/82, Rec. 1983-10, pp. 3573-3549, cdo. 25.

(130) Sentencia de 9 de noviembre de 1983, as. 158/82, Rec. 1983-10, p. 3573-3594, cdos. 18 y 19.

la misma responde a las condiciones mencionadas y si, como en el caso, de autos, la categoría de los productos afectados comprende una vasta pluralidad de productos determinados por criterios generales y objetivos (131).

**4.4.4.9. Tasas nacionales incompatibles con el Derecho comunitario.**—En la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (132), el Tribunal ha señalado que el derecho a obtener el reembolso de tasas percibidas por un Estado miembro, en violación de las reglas de Derecho comunitario, es consecuencia y complemento de los derechos conferidos a los justiciables por las disposiciones comunitarias que prohíben los impuestos de efecto equivalente a los derechos de aduana o, según el caso, la aplicación discriminatoria de impuestos interiores. Si bien es verdad que el reembolso no puede ser perseguido más que en el marco de las condiciones, de fondo y forma fijadas por las diversas legislaciones nacionales en la materia, estas condiciones, según una jurisprudencia constante del Tribunal, no pueden ser menos favorables que las que se refieren a reclamaciones parecidas de naturaleza interna y no pueden ser dispuestas de manera que sea prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el orden jurídico comunitario.

En relación con esta misma materia, el Tribunal ha declarado que un gravamen compensatorio sobre un producto agrícola, no sujeto aún a una organización del mercado —cuyo fin es equilibrar las diferencias de precio existentes en los diversos Estados miembros—, no puede ser asimilado a una tasa de efecto equivalente a un derecho de aduana, por más que, como precisa el Tribunal en la sentencia de 22 de febrero de 1984 (133), aparentemente constituya un trastorno en las corrientes comerciales intracomunitarias. Se trata, en efecto, de un gravamen de interés general cuya cuantía fija la Comisión y no unilateralmente el Estado miembro, para hacer posible que los productos provenientes de los Estados miembros donde exista tal ayuda a esa producción puedan acceder a los mercados de los demás Estados miembros sin perturbar sus propios mercados, anulando las disparidades artificiales de precio que pudieran existir y en tanto se establezca la organización del mercado comunitario para ese producto.

Es una atribución de la Comisión velar para que la duración y la cuantía de los gravámenes queden limitados a lo que sea estrictamente necesario para mantener el equilibrio de los mercados y la libertad del comercio intracomunitario.

**6.4.4.10. Tasas indebidamente percibidas: Improcedencia de su devolución.**—Declara el Tribunal (134) que el Derecho comunitario no impide que un sistema jurídico nacional niegue una devolución de tasas indebidamente percibidas cuando ésta suponga un enriquecimiento sin causa a los interesados. Por consiguiente, nada se opone, desde el punto de vista del Derecho comunitario, a que las juris-

(131) Sentencia de 9 de noviembre de 1983, as. 158/82, Rec. 1983-10, pp. 3573-3594, cdos. 21, 22 y 24.

(132) As. 199/82, Administration des Finances de l'Etat/San Giorgio, Rec. 1983-10, pp. 3595-3637, cdo. 12.

(133) As. 337/82, St. Nikolaus Brunnerrel, Rec. 1984-2, pp. 1051-1074, cdo. 15.

(134) Sentencia de 9 de noviembre de 1983, as. 199/82, Rec. 1983-10, pp. 3595-3637, cdo. 13.

dicciones tengan en cuenta, conforme a su derecho nacional, el hecho que las tasas indebidamente percibidas han podido ser incorporadas en el precio de las mercancías y repercutidas así a los compradores.

## 7. POLITICA COMUNITARIA

### 7.1. Política económica y monetaria

**7.1.1. Normativa nacional sobre control de cambios.**—El Tribunal afirma (135) que el artículo 106 del Tratado CEE debe ser interpretado en el sentido de que las transferencias por turismo, viajes de negocios o de estudios y por motivos de salud constituyen pagos corrientes y no movimientos de capital aunque se efectúen dichos pagos mediante billetes de banco, pues las restricciones a los pagos se suprimieron al finalizar el período de transición.

Ello no obsta a que los Estados miembros conserven el poder de controlar si las transferencias de divisas pretendidamente afectadas a pagos liberalizados son utilizados en realidad para realizar movimientos de capital no autorizados.

Sin embargo, estos controles no pueden tener por efecto el limitar los pagos y transferencias en concepto de prestaciones de servicios por una cierta cantidad por transacción o período, ni el hacer ilusorios las libertades reconocidas por el Tratado, ni someter su ejercicio a la discreción de la Administración.

Estos controles sí pueden fijar unos límites porcentuales por debajo de los cuales no se efectuará algún control mientras que, para los gastos realizados por debajo de esos límites, la realidad de la afectación a los intercambios de servicios debe ser justificada, a condición sin embargo de que el porcentaje no sea establecido de manera que comprometa el curso normal de los intercambios de servicios.

### 7.2. Política comercial común

#### 7.2.1. Disciplina del mercado

**7.2.1.1. Adopción de medidas provisionales por la Comisión: Condiciones.**—En la sentencia de 28 de febrero de 1984 (136), el Tribunal, como ya había declarado en el auto de 17 de enero de 1980, ha señalado, que las medidas provisionales que la Comisión puede dictar, de acuerdo con los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, son las que parezcan indispensables para evitar que el ejercicio del derecho de decisión previsto por el artículo 3 del reglamento número 17 del Consejo (137) no acabe por devenir ineficaz o ilusorio, en razón de la acción de algunas empresas.

(135) Sentencia de 31 de enero de 1984, as. ac. 286/82 y 26/83. *Luisi et Carbone*, Rec. 1984-1, pp. 377-421.

(136) As. ac. 228 y 229/82, *Ford/Comisión*, Rec. 1984-2, pp. 1129-1176, cdo. 19.

(137) *JOCE*, 1962, p. 204.

### 7.2.1.2. Acuerdos entre empresas

— **Contratos de entrega que restringen la libertad del comprador para utilizar la mercancía recibida.**—En su sentencia de 14 de diciembre de 1983 (138), el Tribunal establece que las disposiciones de un contrato concluido entre un exportador francés y un importador establecido en la República Federal de Alemania, que impongan al comprador, designado por el contrato como importador exclusivo, la obligación de no vender la mercancía que se le entrega en una región determinada y de no captar clientes en otra determinada región, si no es contando con el visto bueno del vendedor, tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del Mercado Común. Por tanto son contrarias al artículo 85, 1.º, del Tratado CEE y resultan nulas si el contrato es susceptible de afectar al comercio entre Estados miembros. Cuando tal contrato afecte aproximadamente a un 10 por 100 de las exportaciones del producto en cuestión entre Francia y la República Federal, se entiende que es susceptible de afectar de forma sensible el comercio entre Estados miembros de la CEE.

— **Diversidad de efectos respecto de los distintos elementos de un contrato que infringe el artículo 85, 1.º.**—En su sentencia de 14 de diciembre de 1983 (139), el Tribunal establece que la nulidad de pleno derecho prevista por el artículo 85-2.º del Tratado CEE sólo contempla las disposiciones contractuales incompatibles con el artículo 85-1.º. Las consecuencias de esta nulidad para los demás elementos del contrato y para los pedidos que se hayan realizado eventualmente y las entregas efectuadas sobre la base del acuerdo, con las consiguientes obligaciones de pago que deriven del mismo, no son relevantes para el Derecho comunitario. Tales consecuencias las podrá apreciar la jurisdicción nacional según su propio derecho.

### 7.2.1.3. Posición dominante

— **Criterio para la delimitación geográfica de una situación de posición dominante de una empresa en un sector de mercado.**—En su sentencia de 9 de noviembre de 1983 (140), el Tribunal estima que la limitación por parte de la Comisión del análisis de la posición dominante de una empresa a un solo mercado, el holandés en el caso de autos, cuando esta empresa pertenece a un grupo más amplio, como es Michelin, que opera a escala universal, no resulta errónea ni demasiado restringida. El Tribunal señala que la Comisión había dirigido su decisión únicamente a la filial holandesa del grupo Michelin, cuyas actividades se concentran en el mercado holandés. La amonestación de la Comisión se refiere al comportamiento de la empresa en cuestión, La NBIM, respecto de los vendedores minoristas de neumáticos, y en particular a su política de bonificación.

(138) As. 319/8, Rec. 1983-11, pp. 4173-4191, parte dispositiva, apartado 1).

(139) As. 319/82, Rec. 1983-11, pp. 4173-4191, parte dispositiva, ap. 2.º).

(140) As. 322/81, Rec. 1983-10, pp. 3481-3547, cdos. 22 a 28.

En este aspecto, la política comercial de las diferentes filiales de los grupos que compiten a escala europea o incluso mundial se adapta, por lo general, a las condiciones específicas de cada mercado. En la práctica, los vendedores establecidos en Holanda se abastecen en los mayoristas que ejercen sus actividades también en Holanda. Por lo tanto, el Tribunal estima que la Comisión considera acertadamente que la competencia a la que se expone NBIM se ejerce predominantemente en el mercado holandés y que debe ser en éste donde las condiciones de mercado deben ser similares para los agentes económicos.

Esta constatación es independiente de la cuestión de saber si en tales circunstancias pueden entrar en consideración, para la apreciación de la existencia de una situación de posición dominante en este sector de mercado, factores relacionados con la situación del grupo Michelin y del conjunto de sus competidores, referidas a un mercado mucho más amplio.

— **Criterios para su determinación.**—De igual manera que estima el Tribunal que la limitación por parte de la Comisión del análisis de la posición de una empresa a un solo mercado no resulta errónea ni demasiado restringida, aunque tal empresa pertenezca a un grupo más amplio, porque las actividades a tener en cuenta se concentren en un solo mercado, en su sentencia de 9 de noviembre de 1983 (141) también considera que para apreciar la potencia económica de la empresa y de sus competidores en dicho mercado, el holandés en este caso, deben tenerse en cuenta los beneficios que la pertenencia de estas empresas a grupos más amplios pueden suponerles. Entre tales ventajas el adelanto de Michelin en materia de inversiones y de investigación respecto de sus competidores se debe constatar. Esta situación asegura a NBIM la preferencia constante por parte de un número considerable de consumidores de neumáticos para camiones y vehículos pesados en Holanda. Dado que la adquisición de neumáticos constituye una inversión importante para cualquier empresa de transporte, que tarda tiempo en amortizar, NEIM se beneficia de una posición poco vulnerable por parte de la competencia, que tiene como efecto que para cualquier minorista resulte imprescindible tener en existencias neumáticos Michelin. Por otra parte, hay que señalar la importancia de la red de delegados comerciales de NBIM, que le permite un acceso directo a los consumidores y la prestación de un nivel de servicios que permiten a esta empresa confirmar y reforzar su posición en el mercado y defenderse perfectamente de la competencia.

En otro aspecto, observa el Tribunal que la existencia temporal de una rentabilidad nula e incluso de pérdidas, no son elementos incompatibles con una posición dominante.

Finalmente, ni la dimensión, ni la potencia financiera ni el grado de diversificación de sus competidores a nivel mundial, ni el contrapeso resultante del hecho que los consumidores de neumáticos para vehículos pesados sean consumidores expertos, pueden afectar a la posición privilegiada que esta empresa tiene en el mercado holandés.

Lo que sí deja bien claro el Tribunal es que la comprobación de la existencia de una posición dominante, en sí misma considerada, no lleva implícita ninguna

((141) As. 322/81, Rec. 1983-10, pp. 3461-3547, cdos. 55 a 61.



clase de amonestación respecto de la empresa interesada, sino que significa que, con independencia de las causas que han motivado esta situación, a tal empresa le corresponde la responsabilidad concreta de no perjudicar con su comportamiento la competencia real y efectiva dentro del Mercado Común.

— **Factores a determinar en el análisis de una situación de posición dominante.** En su sentencia de 9 de noviembre de 1983 (142), el Tribunal se remite al criterio expuesto en su sentencia de 11 de diciembre de 1980 (143), respecto del examen de una posible situación de posición dominante de una empresa en un mercado determinado, en el sentido de que las posibilidades de competencia deben apreciarse en el marco del mercado que recoge al conjunto de los productos que, en función de sus características, resultan particularmente aptos para satisfacer necesidades constantes y que son escasamente intercambiables con otros.

Por otra parte el Tribunal expresa su creencia de que también es oportuna la observación de que la determinación de un mercado sirve para evaluar si la empresa afectada tiene la posibilidad de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva y comportarse, en medida apreciable, con independencia de sus competidores, de sus clientes y de sus consumidores. En este sentido no se podría limitar únicamente al examen de las características objetivas de los productos, sino que también sería preciso tomar en consideración las condiciones de competencia y la estructura de la demanda y de la oferta en el mercado.

#### — Abuso de posición dominante

— **Sistema de bonificaciones que implica la restricción de la capacidad de elección del vendedor.**—En su sentencia de 9 de noviembre de 1983 (144) el Tribunal al analizar los elementos de una situación que puede comportar abuso de situación dominante por parte de una empresa que opera en el mercado de neumáticos holandés, examina los factores que forman el criterio de la Comisión para ir determinando la situación que el órgano comunitario estima constitutiva de infracción del artículo 86 del Tratado CEE, por el hecho de fundarse en la fijación de objetivos de venta individuales y selectivos y que no se especifican por escrito, para el establecimiento del sistema de bonificaciones de la filial de Michelin en Holanda, vinculando así a cada vendedor con dichas condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.

El Tribunal considera que para la aplicación del artículo 86 a un sistema de bonificaciones que depende de objetivos de venta, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que, al prohibir la explotación abusiva de posición dominante en el mercado, en tanto en cuanto puede resultar afectado el comercio entre Estados miembros, el artículo 86 se dirige a los comportamientos que pueden influenciar la estructura de un mercado en el que el grado de competencia se encuentra debilitado precisamente por la presencia de la empresa en cuestión, que al recurrir a medios de actuación diferentes de los que aseguran un funcionamiento nor-

(142) As. 322/81, Rec. 1983-10, pp. 3461-3547, cdo. 37.

(143) As. 31/80, Rec. 1980, p. 3775.

(144) As. 322/81, Rec. 1983-10, pp. 3461-3547, cdos. 70 a 80.

mal del mercado, obstaculiza y distorsiona el grado de competitividad que se puede dar en el mismo.

Al tratarse más concretamente de la concesión de rebajas a sus clientes por parte de una empresa en posición dominante, de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal (145), hay que diferenciar la rebaja de cantidad, vinculada exclusivamente al volumen de compras efectuadas al productor interesado, de la rebaja de fidelidad, que tiende a impedir mediante la concesión de ventajas de financiación, el abastecimiento de los clientes en productores de la competencia, lo que constituye un abuso en los términos del artículo 86 del Tratado CEE.

El Tribunal estima en este sentido que el sistema de NBIM no constituye simplemente un descuento de cantidad vinculado exclusivamente al volumen de compras, sino que, para determinar si esta empresa ha procedido a una explotación abusiva de su posición dominante mediante este sistema, es preciso apreciar el conjunto de las circunstancias y en particular los criterios y modalidades en la concesión de descuentos, y examinar si el descuento tiende, por la concesión de una ventaja que no se funda en ninguna prestación económica que la justifique, a privar o restringir al vendedor en su posibilidad de elección de sus fuentes de abastecimiento; a impedir al acceso del mercado a otros competidores, a aplicar a socios comerciales condiciones desiguales a prestaciones equivalentes; o a reforzar su posición dominante mediante el falseamiento de la competencia.

En este sentido, y una vez examinados los informes en que se expresaba el criterio de la Comisión, el Tribunal entiende que resulta inherente a todo sistema de bonificaciones concedido en función de las cantidades vendidas en el curso de un período de referencia relativamente largo, que la presión del vendedor se vaya incrementando al final del mismo, al irse haciendo más apremiante la necesidad de realizar la cifra de negocios, necesaria para obtener el beneficio o no sufrir la pérdida prevista para todo el período. En el caso en concreto, las variaciones de la tasa de bonificación en razón de un último encargo se repercutirían en el margen de beneficios del vendedor en las ventas de neumáticos de camiones de todo el año. En tales circunstancias, incluso la existencia de pequeñas variaciones en las posibilidades de ventas podrían ejercer una considerable presión en los vendedores de la marca.

Este efecto se encontraría reforzado todavía más por las grandes diferencias existentes entre el sector de mercado propio de NBIM y el de sus principales competidores. Un competidor de NBIM que pensase en proponer a un vendedor cualquier tipo de ventaja competitiva al hacer un pedido, particularmente en fin de ejercicio, debería tener en cuenta el valor absoluto de la bonificación anual de objetivo de NBIM y fijar la suya propia en términos relativos al volumen más reducido de las compras que le pudiera hacer tal vendedor, a un porcentaje muy elevado en relación a dicho volumen de compra.

De este modo resultaría muy difícil para los competidores compensar a los vendedores por las ventajas o las pérdidas resultantes por realizar o no los objetivos de NBIM.

(145) Asuntos acumulados 40-48, 50-54-56, 111, 113 y 114/73, Rec. 1975, p. 1683; asunto 85/76, Rec. 1979, p. 461.

Por otra parte, la falta de transparencia del conjunto del sistema de bonificaciones de NBIM, cuyas modalidades por otra parte han cambiado varias veces en el curso de este período de tiempo, así como las circunstancias de que ni la escala de bonificaciones, ni los objetivos de venta y sus respectivos descuentos no se comunicasen por escrito a los vendedores, tenían por efecto que éstos se encontrasen en una situación de inseguridad y que, en términos generales, no pudiesen prever con exactitud las consecuencias que tendría cumplir o no con los objetivos.

Todos estos factores contribuirían a crear entre los vendedores una situación en la cual se encontrarían expuestos, particularmente en fin de ejercicio, a una presión considerable para realizar los objetivos de venta de NBIM si no querían correr el riesgo de incurrir en unas pérdidas que los competidores podrían difícilmente compensar por los descuentos que les pudieran ofrecer. La red de delegados comerciales de NBIM le permitía en todo momento recordar a los revendedores esta situación para incitarlos a realizar pedidos a esta empresa.

En este sentido, entiende el Tribunal que tal situación es susceptible de impedir a los vendedores la posibilidad de elegir libremente y en todo momento y en función de la situación del mercado la oferta más favorable que les hagan los diferentes competidores en presencia y cambiar de proveedor sin desventaja económica sensible. Se restringe así la capacidad de elección de los vendedores respecto de sus abastecedores y hace más difícil el acceso al mercado para los demás competidores. La situación de dependencia de los vendedores, creado por el sistema de bonificaciones no se funda, por lo tanto, en ningún tipo de contrapartida económica justificada.

De todo lo cual concluye el Tribunal que al condicionar, de esta forma a los vendedores de neumáticos holandeses, NBIM ha estado explotando de forma abusiva, en el sentido del artículo 86, su posición dominante en el referido sector de actividad.

**7.2.1.4. Determinación individual de una sanción económica por infracción de las normas de la competencia.**—En su sentencia de 8 de noviembre de 1983 (146), el Tribunal estima que para apreciar la gravedad de una infracción hay que tener en cuenta un gran número de elementos cuyo carácter e importancia varían según la clase de la infracción y de sus particulares circunstancias. Entre tales elementos pueden figurar, según el caso, el volumen y el valor de las mercancías objeto de la infracción así como el tamaño y la potencia económica de la empresa, y, por tanto, la influencia que pueda ejercer en el mercado. También reconoce compatible con la determinación individual de la sanción, la fijación previa en un límite global para la multa, determinado en relación con la gravedad del peligro que la entente representase para la competencia y los intercambios en el Mercado Común.

En este sentido, el Tribunal considera justificado, en este caso, que la Comisión, teniendo en cuenta los perjuicios que el acuerdo objeto del litigio podía haber causado, haya procedido a determinar en primer lugar la suma global de

---

(146) Asuntos acumulados 96-102, 104, 105, 108 y 110/82, Rec. 1983-10, pp. 3369-3430, cdos. 51 a 53.

las multas a imponer, aplicando a este efecto al valor de las importaciones en cuestión, el porcentaje escogido. La Comisión también tenía justificación para proceder a repartir a continuación este total entre las empresas sancionadas clasificándolas por grupos constituidos de acuerdo con el número de etiquetas de marcas encargadas.

### 7.3. Política agrícola común

**7.3.1. Vigencia del artículo 46 del Tratado CEE.**—Ha dicho el Tribunal en la sentencia de 21 de febrero de 1984 (147) que, ante las dificultades de interpretación del artículo 46 del Tratado, CEE, para determinar su alcance, ha de tenerse en cuenta, a la vez, sus términos, su contexto y su contenido. Incluso si es necesario reconocer que dicha disposición está destinada a perder gradualmente su campo de aplicación, a medida que se vaya realizando el mercado comunitario de productos agrícolas mediante la implantación de organizaciones comunes de mercado, conviene subrayar que esta disposición no ha previsto, en ninguna parte, que quede limitada su aplicación a sólo el período transitorio. Resulta, por el contrario, que, de sus términos, se desprende que puede aplicarse en tanto que un Estado miembro mantenga, para ciertos productos, una organización nacional del mercado o cualquier otra reglamentación interna de un efecto equivalente, lo que ocurre con el caso de autos.

**7.3.2. Funciones del artículo 46 TCEE después del período transitorio.**—El artículo 46 del Tratado CEE constituye para la Comisión un instrumento útil que le permite tomar medidas de salvaguardia inmediatas contra las distorsiones en la competencia creadas por un Estado miembro, mientras un producto agrícola no haya sido sometido a una organización de mercados agrarios.

Así ha señalado el Tribunal en la sentencia de 22 de febrero de 1984 (148), la instauración de gravámenes compensatorios, en virtud de esta disposición, permite realizar los objetivos fijados en el artículo 39 del mismo Tratado, en especial, los que se refieren a la estabilidad de los mercados agrícolas y asegurar un nivel de vida equitativo a la población agraria afectada; ya que este mecanismo hace posible mantener las corrientes en los intercambios normales en circunstancias excepcionales y provisionales que justifican estas medidas.

**7.3.3. Período transitorio en materia agrícola.**—Ante la duda del juez nacional de si para los productos sujetos a una organización común de mercado en el momento de la adhesión a las Comunidades del Reino Unido, la supresión de las medidas de efecto equivalente a restricciones de cantidades previstas en los artículos 30 y 34 del Tratado CEE, ha tenido efecto a partir del 1 de febrero de 1973 o si sólo a partir de 1 de enero de 1975, fecha prevista por la regla

(147) As. 337/82, St. Nikolaus Brunnerel, Rec. 1984-2, pp. 1501-1074, cdos. 1 a 11.

(148) As. 337/82, St. Nikolaus Brunnerel, Rec. 1984-2, pp. 1051-1074, cdo. 14.

general del artículo 42.2 del Acta de Adhesión, el 13 de diciembre de 1983 (149) el Tribunal indica que las disposiciones del artículo 60 del mismo Acta, derogan las reglas generales del artículo 42, por lo que las disposiciones del Tratado CEE que prohíben la aplicación de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas son de aplicación a los productos sujetos a una organización común de mercados agrícolas en el momento de la adhesión del Reino Unido, a partir del 1 de febrero de 1973.

**7.3.4. Organizaciones comunes de mercados agrarios y publicidad.**—En la decisión prejudicial de 13 de diciembre de 1983 (150) el Tribunal, aun reconociendo que las campañas de promoción de ciertas variedades de frutas puedan tener, como resultado, la exclusión del mercado de otras variedades y hacer necesaria la aplicación de medidas de intervención previstas por la organización común del mercado, respecto de las variedades preferidas a causa de dicha publicidad por el Estado miembro afectado. Tal distorsión de las condiciones de la competencia, incompatible con el buen funcionamiento de la organización común de los mercados no debe, sin embargo, justificar la prohibición de cualquier campaña de promoción que trate de resaltar el valor de las propiedades de ciertas variedades de frutas con indicación de las utilidades a las que estas variedades se prestan de manera específica.

**7.3.5. Legitimidad de la publicidad de productos agrarios.**—En la respuesta del Tribunal de 13 de diciembre de 1983 (151) examina el juez de las CCEE la compatibilidad de la publicidad y promoción de peras y manzanas que se hace de las producidas en Inglaterra y Gales y en particular de variedades típicas de estos países, por un organismo que agrupa a determinados productores, con las disposiciones de los artículos 30 y 34, y/o con los artículos 38 a 47 del Tratado CEE, y/o con el reglamento del Consejo 1.035/72 (152), señalando que una campaña publicitaria en favor de la venta y de la compra de productos indígenas puede caer bajo la prohibición del artículo 30 del Tratado CEE si se dan ciertas condiciones cuando sea sostenida por los poderes públicos.

Que un organismo que ha sido creado por el Gobierno de un Estado miembro y es financiado con gravámenes detraídos a los productores de aquellas frutas, no puede gozar, en el Derecho comunitario, de la misma libertad que la que tengan los productores o las asociaciones de productores de carácter voluntario, en lo que se refiere a los medios de publicidad empleados. En particular, el organismo apoyado por el Estado tiene el deber de abstenerse de toda publicidad tendente a desaconsejar la compra de productos de otros Estados miembros o de despreciarlos a los ojos de los potenciales compradores o consumidores, ni debe

(149) As. 222/82, Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, pp. 4083-4142, cdos. 43 a 45 y parte dispositiva. Vid. también sentencia de 29 de marzo de 1979, as. 231/78, Comisión/Reino Unido, Rec. 1979, p. 1447.

(150) As. 222/82, Rec. 1983-11, pp. 4083-4142, cdos. 20 y 21.

(151) As. 222/82, Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, pp. 4083-4142, cdos. 16 a 19 y parte dispositiva.

(152) De 18 de mayo de 1972. JOCE, núm. L 118, p. 1.

aconsejar a los consumidores comprar únicamente productos indígenas en razón de su origen nacional.

Pero el artículo 30 del Tratado CEE no es contrario a que la publicidad resalte las cualidades específicas de los productos nacionales o a que se organicen campañas de promoción para la venta de ciertas calidades recalando sus propiedades particulares incluso si estas variedades son típicas de la producción nacional.

**7.3.6. Organización de productores y Derecho comunitario.**—Por demanda prejudicial el juez nacional trata de saber la compatibilidad con los artículos 30 y 34; y/o con los artículos 38 a 47 del Tratado CEE y/o con los artículos 42 y 60,1 del Acta de Adhesión a las CCEE del Reino Unido de un organismo nacional que se financia mediante detracciones pecuniarias pagadas por los productores que dispongan de determinado potencial de producción que están obligados a registrarse y a suministrarle declaraciones e informaciones sobre sus actividades, así como si tal organismo puede considerar contrario a esas disposiciones en razón de las funciones que tienen confiadas (153).

En la respuesta de 13 de diciembre de 1984 (154) afirma el Tribunal que tal organismo no constituye una organización de productores en el sentido del título II del reglamento del Consejo 1.035/72 (155) con participación en la administración del régimen de precios y de intervenciones.

Tal organismo no tiene por objeto actuar como intermediario en la venta de los productos ni intervenir en el mercado.

El examen de las funciones confiadas a su consejo debe centrarse en saber si su ejercicio puede suponer un obstáculo, de otra manera, al comercio intracomunitario o al funcionamiento de la organización común del mercado en el sector agrícola considerado. En este orden de cosas, el juez comunitario entiende que la investigación científica o técnica, la elaboración de estadísticas, la difusión entre sus asociados de las informaciones obtenidas, no son funciones que, por su naturaleza, sea susceptibles de entorpecer el comercio intracomunitario ni el funcionamiento de la organización común del mercado de un producto agrícola.

Ello no obstante, la enumeración de otras actividades en el anejo de creación del mentado organismo no permiten, por si mismas, excluir tal incidencia. Tal sucede con la publicidad y promoción de sus productos.

**7.3.7. Compatibilidad con el Derecho comunitario de obligaciones supuestas a los productos agrícolas de peras y manzanas en el Reino Unido.**—Se inquiriere del juez comunitario diga si la obligación de afiliarse a un organismo creado por un Estado miembro impuesta a los productores de ciertos productos agrícolas y el deber subsiguiente del pago de determinadas cuotas que constituyen un gravamen es o no compatible con los artículos 30 y 34; y/o 38 a 47 del Tratado CEE, y/o 42 y 80 del Acta de Adhesión a las CCEE del Reino Unido, el Tribunal centra

(153) El elenco de las funciones confiadas a este organismo nacional se recoge en el considerando 5 de la sentencia que reproduce el anejo de creación del mismo Rec. 1983-11, pp. 4113-4115.

(154) As. 222/82, Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, pp. 4083-4142, cdos. 1 a 15.

(155) De 18 de mayo de 1972. JOCE, núm. L 118 de 1972, p. 1.

su respuesta en la compatibilidad con los artículos 30 y 34 TCEE, en la decisión prejudicial dada el 13 de diciembre de 1983 (156) recuerda la jurisprudencia sentada por él mismo en el sentido de que tales detracciones, en tanto que medidas de naturaleza fiscal, o equivalente no están contempladas en tales artículos sino en los artículos 9 a 16 y 95 del TCEE y señala que como quiera que tal gravamen no se aplica a los productos importados ni grava los productos destinados a la exportación sino con el mismo criterio que a los productos comercializados sobre el mercado interno, dicho gravamen no plantea tampoco problemas en relación con los artículos citados en último lugar.

Pero, como subraya el Tribunal citando su propia jurisprudencia (157), un gravamen impuesto a los productos agrícolas, es incompatible con la reglamentación comunitaria relativa a la política agrícola común, en la medida en que tuviera por efecto incidir en la formación de los precios, sea modificando la estructura de las explotaciones agrarias que pudiera resultar de ello, sea entorpeciendo el funcionamiento de los mecanismos previstos en el marco de las organizaciones comunes de mercado.

Una tasa cuyo producto se destina básicamente a gastos de publicidad de los productos de la asociación de productores, que, de otro modo, tendría que ser satisfecho por los propios productores, no puede tener tales efectos.

En consecuencia, decide el Tribunal que las disposiciones arriba citadas no son contrarias a la obligación impuesta a los productores de afiliarse a un organismo ni a que contribuyan a financiar sus actividades mediante el pago de un gravamen, salvo en la medida en que estas actividades fueran contrarias a dichas disposiciones y sin perjuicio de las competencias de apreciación que corresponden al juez nacional en orden a la solución del litigio.

### 7.3.8. Restituciones a la exportación

7.3.8.1. En la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (158), ha afirmado el Tribunal que si durante un período de tiempo las exportaciones comunitarias de determinados productos agrarios —el trigo, entre ellos— no generaban derecho a percibir restituciones por exportación; el depósito del documento de pago ante las autoridades competentes para el otorgamiento de las restituciones y montantes compensatorios monetarios, debe entenderse como una medida de prudencia para todos los fines útiles del interesado. De manera que la falta de solicitud expresa de la restitución no debe interpretarse como una renuncia al cobro de las cantidades por parte del interesado.

Los ejemplares de control añadidos a los documentos de pago depositados por el organismo de intervención nacional ante el órgano liquidador de cuentas de FEOGA, con las indicaciones que permiten conocer que se trata de mercancías

(156) As. 222/82, Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, pp. 4084-4142, cdos. 26 a 32 y parte dispositiva.

(157) Vid. sentencia de 26 de octubre de 1983, as. 287/82 de Samvirkende, Rec. 1983, p. 3299.

(158) As. 46/82, Alemania/Comisión, Rec. 1983-10, pp. 3549-3571, cdos. 11 a 13 y parte dispositiva.

que se benefician del pago de montantes compensatorios monetarios han de ser considerados como equivalentes de la solicitud escrita para la percepción de esos montantes.

7.3.8.2. Ha interpretado el Tribunal, en la decisión de 17 de noviembre de 1983 (159), en relación con las restituciones a la exportación de mercancías no relacionadas en el anejo II del Tratado CEE, que aquellas mercancías cuya fabricación se hace a partir de productos agrícolas de origen comunitario, se benefician de las restituciones a la exportación para compensar los costes de producción ocasionados por el nivel de los precios vigentes en la Comunidad que, como es sabido, son más altos que en el mercado mundial y compensar así a las industrias comunitarias, tratando de equilibrar las condiciones de competencia entre las industrias comunitarias y las de los países terceros que se aprovisionan en los mercados mundiales.

El Tribunal precisa que debe evitarse cualquier sobrecompensación, si a ello se suman otras ayudas, como pudieran ser las restituciones a la producción.

Por ello, la reglamentación comunitaria, al fijar los tipos de la restitución a la exportación, tiene en cuenta las restituciones a la producción de los productos de base utilizados en la composición de los productos transformados.

### 7.3.9. Política agrícola sectorial

7.3.9.1. **Fijación unilateral de precios a la producción de leche por un Estado miembro: Incompatibilidad con la reglamentación comunitaria.**—En la sentencia de 7 de febrero de 1984 (160), ha señalado el Tribunal, como ya había dicho en la sentencia de 6 de noviembre de 1979 (161) que, una legislación nacional destinada a promover y favorecer, por cualquier método, el establecimiento de un precio uniforme a la producción de leche, por convenio o autorización, a nivel nacional o regional, se sitúa, por naturaleza, fuera de las competencias reservadas a los Estados miembros y choca con el principio por el reglamento del Consejo número 804/68 (162), y principalmente por su artículo 3, de la realización de un precio indicativo a la producción para la leche vendida por los productores comunitarios.

7.3.9.2. **Normas de calidad de frutas y verduras.**—En la decisión prejudicial de 13 de diciembre de 1983 (163) ha dicho el juez comunitario que la reglamentación de la organización del mercado de frutas y verduras, contiene un sistema de normas de calidad aplicable a peras y manzanas que presenta un carácter exhaustivo y a menos que en dicha reglamentación no se disponga otra cosa, los Estados

(159) As. 292/82, Merck, Rec. 1983-10, pp. 3781-3801, cdos. 13 a 19 y parte dispositiva.

(160) As. 168/82, Comisión/Italia, Rec. 1984-2, pp. 459-481, cdo. 23.

(161) As. 10/79, Toffoli, Rec. 1979, p. 3301.

(162) JOCE, núm. L 148, p. 13.

(163) As. 222/82, Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, cdos. 22 a 25 y parte dispositiva 1.c).



miembros y, con mayor razón los organismos privados no pueden adoptar decisiones unilaterales sobre la calidad de los productos comercializadas por los propios productores.

Las normas comunitarias no excluyen ciertamente una competencia sobre la calidad de las frutas entre productores de un mismo Estado miembro o de varios. Tampoco disponen nada en contra de que los propios productores velen por el buen renombre de sus productos ni que organismos integrados por éstos aconsejen a sus asociados sobre la calidad y presentación de sus productos, bajo la forma de puras recomendaciones.

Ahora bien, si el organismo citado trata de imponer el respeto a esas recomendaciones aplicando sanciones o explotando su autoridad para ejercer presión sobre los productores o los comerciantes, ello sería contrario al carácter exhaustivo de la reglamentación comunitaria.

Es el juez nacional el que debe sacar las consecuencias de la compatibilidad de la reglamentación comunitaria con el derecho nacional en base a los elementos de interpretación suministrados por la jurisdicción comunitaria.

#### 7.4. Política de coyuntura

**7.4.1. Montantes compensatorios monetarios.**—En la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (164), ha declarado el Tribunal que si las necesidades del buen funcionamiento del sistema de montantes compensatorios monetarios —que es un sistema complejo— hacen necesaria la exigencia de una solicitud por escrito del interesado, ha de evitarse un formulismo riguroso que vaya más allá de las necesidades de un control eficaz de las operaciones, como ya señala el Tribunal con respecto de las restituciones (165).

#### 7.5. Política legislativa

##### 7.5.1. Armonización de legislaciones

**7.5.1.1. Poder discrecional de la Administración.**—En el marco del ejercicio de los poderes conferidos a las instituciones por los artículos 43 y 100 del Tratado CEE, es necesario reconocer a estas instituciones un margen de apreciación especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de no proceder más que a una armonización por etapas, y de no exigir más que una supresión progresiva de las medidas unilaterales adoptadas por los Estados miembros, sostiene el Tribunal en sentencia de 29 de febrero de 1984 (166). Por consiguiente, considerando las

(164) As. 48/82, Alemania/Comisión., Rec. 1983-10, pp. 3549-3571, cdo. 10.

(165) Vid. sentencia de 6 de junio de 1972, as. 94/71, Schlüter, Rec. 1972, p. 307; sentencia de 22 de enero de 1975, as. 55/74, Unkel, Rec. 1975, p. 9.

(166) As. 37/83, Rewe-Zentrale/Landwirtschaftskammer Rheinland, Rec. 1984-2, pp. 1229-1255, cdo. 20.

especiales características de la lucha contra los organismos perjudiciales a las verduras, así como el carácter muy parcial de la armonización hasta ahora realizada, el Consejo, al permitir los controles por sondeo de hasta una tercera parte de los envíos, no se ha excedido de los límites de su poder de apreciación.

**7.5.1.2. Productos farmacéuticos.**—El Tribunal, en sentencia de 26 de enero de 1984 (167), afirma que la directiva 65/65 (168), tiende únicamente a armonizar las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros relativas a los productos farmacéuticos y que tengan relación con la salud pública. La directiva no contiene ninguna disposición que tenga por objeto limitar el poder de los Estados miembros de reglamentar los precios de estos productos, y ante el silencio del texto no puede presumirse semejante limitación.

En la misma sentencia (69) el Tribunal también señala que el artículo 21 de la mencionada directiva debe interpretarse en el sentido de que la autorización de puesta en el mercado de una especialidad farmacéutica no puede ser denegada, suspendida o retirada más que por motivos de protección de la salud pública, contemplados por la directiva.

**7.5.1.3. Seguro de responsabilidad civil de automóviles.**—La expresión «en las condiciones fijadas por su propia legislación nacional relativa al seguro obligatorio» contenida en el artículo 2, par. 2, de la directiva 72/166 (170), debe ser entendida como que se refiere a los límites y condiciones de la responsabilidad civil aplicables al seguro obligatorio, entendiéndose que el conductor del vehículo en el momento del siniestro está asegurado válidamente según dicha legislación, observa el Tribunal en sentencia de 9 de febrero de 1984 (171).

Sobre ese mismo tema, también precisa el Tribunal, en sentencia de 9 de febrero de 1984 (172) que cuando un vehículo lleva una matrícula regularmente concedida, hay que considerar que dicho vehículo tiene su estacionamiento habitual, en el sentido de la directiva 72/166 anteriormente citada, en el territorio del Estado donde está matriculado, incluso si en la época que se contempla le había sido retirada la autorización de utilizar el vehículo, con independencia del hecho de que la retirada de la autorización implique la no validez de la matrícula o la retirada de ésta.

(167) As. 301/82, Clin-Midy/Belgique, Rec. 1984-1, pp. 251-265, cdo. 7 y parte dispositiva.

(168) Del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la armonización de las disposiciones legislativas reglamentarias y administrativas concernientes a las especialidades farmacéuticas, JOCE, número 22 de 9-2-65, p. 369.

(169) Ibid., cod. 11 y parte dispositiva.

(170) Del Consejo, de 24-4-1972, concerniente a la armonización de legislaciones de los Estados miembros relativas al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automotores y al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, JOCE, núm. L 103, p. 1.

(171) As. 64/83, Bureau Central Français/Fonds de Garantie Automobile, Rec. 1984-2, pp. 689-720, cdo. 29 y parte dispositiva.

(172) As. 344/82, Gambetta Auto/Bureau Central Français, Rec. 1984-2, pp. 591-608, cdos. 13 y 14 y parte dispositiva; as. 64/83, cit., cdo. 30 y parte dispositiva.

**7.5.1.4. Armonización de legislaciones en materia de policía sanitaria.**—En las sentencias de 31 de enero de 1984 (173), ha señalado el Tribunal que el párrafo 1 del artículo 11 de la directiva del Consejo 71/118, relativa a problemas sanitarios en materia de cambios de carnes frescas de ave (174), no aparece como tendente a congelar la situación existente en el momento de la entrada en vigor de la directiva. Esta disposición debe ser entendida en el sentido de dejar a los Estados miembros la competencia para dictar las reglas en materia de policía sanitaria, en espera de medidas comunitarias, por lo que no puede tener por efecto sustraer a los Estados miembros la obligación de respetar, en el ámbito cubierto por dicho precepto, las prohibiciones previstas en los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

**7.5.1.5. Disposiciones fiscales.**—La disposición relativa a la exoneración del impuesto sobre el volumen de negocios para las operaciones de negociación de créditos, prevista en el artículo 13, parte B, par. d), punto 1, de la directiva 77/388 (175) puede ser invocada para las operaciones efectuadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1978, en caso de no ejecución de la directiva, por un operador de negociación de créditos, cuando se ha abstenido de repercutir este impuesto en el aval. En efecto, sigue estableciendo el Tribunal en sentencia de 22 de febrero de 1984 (176), la directiva 78/583, de 26 de junio de 1978, que prorroga hasta el 1 de enero de 1979 el plazo de ejecución de la directiva 77/388, carece de efecto retroactivo respecto a las operaciones efectuadas por los operadores económicos, anteriormente a su entrada en vigor.

**7.5.1.6. Finalidad de las directivas de armonización fiscal.**—La finalidad de las directivas relativas a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre el impuesto sobre la cifra de negocios, es la de establecer un sistema común de gravámenes sobre el valor añadido y, en especial, una base imponible uniforme en el plano comunitario; de la misma manera que el arancel exterior común, establece un régimen comunitario para la percepción de los derechos de aduanas.

En efecto, señala el Tribunal en la sentencia de 28 de febrero de 1984 (177) ambos sistemas de gravámenes presentan rasgos esenciales comparables, por cuanto que tienen su nacimiento en el hecho de la importación y consecutiva incorporación de la mercancía importada al circuito económico de los Estados miembros y se constituyen en un elemento del precio de venta, calculándose de manera similar por los sucesivos agentes económicos.

---

(173) As. 40/82, Comisión/Reino Unido, Rec. 1984-1, pp. 263-316, cdo. 13 y as. 74/82, Comisión/Irlanda, Rec. 1984-1, pp. 317-348, cdo. 30.

(174) JOCE, núm. L 55, p. 23.

(175) Del Consejo, de 17-5-1977, en materia de armonización de legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre volumen de negocios-sistema común del impuesto sobre el valor añadido (6.ª directiva), JOCE, núm. L 145, p. 1.

(176) As. 70/83, Kloppenburg/Finanzamt Leer, Rec. 1984-2, pp. 1075-1093, cdos. 12 a 14 y parte dispositiva.

(177) As. 294/82, Einberger/Hauptzollamt Freiburg, Rec. 1984-2, pp. 1177-1194, cdos. 17 y 18.

Este paralelismo se ve confirmado por el hecho de que el artículo 10.3 de la sexta directiva (178), relativa a la definición de la base imponible y al nacimiento de la deuda tributaria del impuesto sobre la cifra de negocios, autoriza a los Estados miembros a vincular el hecho generador y la exigibilidad del impuesto sobre la cifra de negocios a la importación, a los de los derechos de aduanas.

## 7.6. Política fiscal

**7.6.1. Hecho que da lugar al nacimiento de deuda fiscal: Inexistencia.**—Se pregunta al Tribunal comunitario si la percepción del impuesto sobre la cifra de negocios a la importación es de aplicación cuando se trata de la importación ilegal de estupefacientes en la Comunidad y si este supuesto es compatible con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la directiva del Consejo 77/388 (179) dado que los Estados miembros no son ya competentes para percibir los derechos de aduanas a la importación.

En la respuesta de 28 de febrero de 1984 (180), el Tribunal tras observar que el juez «a quo» hace referencia a la sexta directiva, siendo así que las importaciones objeto del litigio tuvieron lugar en 1974 bajo el imperio de la segunda directiva de armonización fiscal, afirma que no existen diferencias entre las dos directivas ni en la redacción de la disposición ni en su contexto.

El Tribunal entiende que, en esencia, se trata de saber si a falta de disposiciones expresas de la directiva sobre este punto, la importación ilegal de estupefacientes constituye o no una operación imponible (según la directiva) o si este silencio debe ser interpretado en el sentido de que deja a los Estados miembros la facultad de decidir acerca de ello.

Señala el Tribunal, en primer lugar, que no es posible interpretar que la directiva deja este punto fuera de su campo de aplicación y que, en consecuencia, otorga libertad a los Estados miembros para que cada uno decida lo que estime conveniente en lo que le concierne, pues ello sería inconciliable con la finalidad de la directiva que busca una armonización tan amplia como sea posible del IVA, en lo que se refiere a la base del impuesto.

Sentado esto, resulta igualmente del contexto y de los objetivos de la sexta directiva, que ésta es contraria a someter al IVA a los estupefacientes importados ilegalmente en la Comunidad. Conclusión ésta que se impone, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal comunitario que ha excluido de la percepción de derechos arancelarios, en casos similares al de autos, en base al hecho de que la situación jurídica —el hecho generador del impuesto— era esencialmente la misma en ambos casos, dado que como ya sostuvo el Tribunal (181) la importación

(178) Directiva del Consejo 77/388, de 17 de mayo de 1977, JOCE, núm. L 145, p. 1.

(179), JOCE, núm. L 145 de 1977, p. 1.

(180) As. 294/82, Einberger/Hauptzollamt Freiburg, Rec. 1984-2, pp. 1177-1194, cdos. 1 a 26 y parte dispositiva.

(181) Vld. sentencias de 5 de febrero de 1981. Horvatl, as. 50/80, Rec. 1981, p. 385; de 26 de octubre de 1982, Wolf, as. 221/81, Rec. 1982, p. 3681; de 26 de octubre de 1982. Einberger, as. 240/81, Rec. 1982, p. 3699.

a la Comunidad de estupefacientes que no se integran en el circuito económico vigilado para ser utilizados para fines médicos o científicos, no puede dar nacimiento a ninguna deuda aduanera.

En el presente caso el Tribunal ha afirmado que los estupefacientes no han sido incorporados al circuito estrictamente vigilado por las autoridades competentes para su uso en fines médicos o científicos, lo que, por definición, hace que queden comprendidos dentro de la prohibición total de importación y comercialización en la Comunidad y, por ello, no son susceptibles de ser gravados por derechos de aduana por estar en un circuito ilegal ya sean descubiertos y destruidos ya logren escapar a la vigilancia de las autoridades, argumento que, según el Tribunal vale igualmente para la percepción del impuesto sobre la cifra de negocios.

**7.6.2. Importación ilegal de estupefacientes y Derecho comunitario.**—Las importaciones ilegales de estupefacientes en la Comunidad, son por completo extrañas a las disposiciones de la sexta directiva (182) relativa a la definición de la base imponible y, por vía de consecuencia, al nacimiento de una deuda fiscal en materia de impuestos sobre la cifra de negocios; pues se trata de mercancías cuya incorporación al circuito económico y comercial de la Comunidad queda, por definición, excluida por completo.

Esto no prejuzga en nada, expresa el Tribunal en la decisión de 28 de febrero de 1984 (183), la competencia de los Estados miembros para perseguir las infracciones a su legislación nacional en materia de estupefacientes con las sanciones previstas y con todas las consecuencias en el terreno pecuniario.

En consecuencia, concluye el Tribunal, de la importación ilegal de estupefacientes en la Comunidad, en cuanto que jamás podrán llegar a formar parte del circuito económico y comercial comunitario estrictamente vigilado por las autoridades para su empleo con fines médicos o científicos, no puede nacer ninguna deuda tributaria por aplicación del impuesto sobre la cifra de negocios.

**7.6.3.—Exención de impuestos sobre el volumen de negocios, derechos de consumo y otras imposiciones agrícolas.**—La directiva 69/169 del Consejo (184), debe ser interpretada en el sentido de que, en el marco del transporte intracomunitario, las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros y adquiridas en tiendas exentas de impuestos en naves transbordadoras que realizan un tráfico regular entre Estados miembros, se benefician, en la importación, de una parte, de las exenciones de impuestos de volumen de negocios y derechos de consumo, y, de otra, de una exención de otros impuestos a la importación de productos agrícolas establecidos por el reglamento número 1.818/75 (185), limitadas tanto en valor como en cantidades a las exenciones concedidas a los viajeros procedentes de un país tercero (186).

(182) Del Consejo 77/388, de 17 de mayo de 1977, JOCE, núm. L 145 de 1977, p. 1.

(183) As. 294/82, Einberger/Hauptzollamt Friburg, Rec. 1984-2, pp. 1177-1194, cdo. 19 a 23 y parte dispositiva.

(184) JOCE, núm. L 133, cit.

(185) JOCE, núm. L 185, p. 3.

(186) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 278/82, cit., cdo. 41 y parte dispositiva.

**7.6.3.1. Reglamentación comunitaria.**—En la sentencia de 14 de febrero de 1984 (187), ha señalado el Tribunal que la directiva del Consejo 69/169/CEE (188) contiene una reglamentación exhaustiva de exenciones de impuestos sobre el volumen de negocios y derechos de consumo aplicables a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros que acceden a las fronteras de los Estados miembros. Sus disposiciones contemplan así todas las exenciones de tales impuestos vinculados al transporte de viajeros, cualquiera que sea su procedencia.

Al conceder exenciones de impuestos sobre el volumen de negocios y derechos de consumo a la importación, en los equipajes personales de los viajeros, por mercancías adquiridas exentas de impuestos en cruceros, entradas por la frontera marítima en el territorio aduanero, sin escala efectiva anterior en otro Estado miembro o en un país tercero, la reglamentación nacional desconocía las disposiciones de la directiva 69/169/CEE.

**7.6.3.2. Exenciones previstas en reglamentos.**—Las exenciones de derechos de aduana, «prélèvements» agrícolas y otros impuestos a la importación de productos agrícolas previstas por los reglamentos del Consejo 1.544/69 (189) y 1.818/75 (190) se aplican a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros procedentes de un país tercero, independientemente del origen y procedencia de las mercancías y de los derechos aduaneros y fiscales con que han sido gravadas antes de su importación al territorio comunitario (191).

**7.6.3.3. Preferencia comunitaria.**—Las mercancías adquiridas con exención de impuestos sobre el volumen de negocios y derechos de consumo en el curso de un transporte intracomunitario por servicio combinado deben, en principio, beneficiarse de exenciones limitadas concedidas a los viajeros procedentes de países terceros. Ninguna exención puede, sin embargo, ser concedida a estas mercancías en la hipótesis en que la escala en el Estado miembro de tránsito revistiera un carácter puramente simbólico y no ofreciera la posibilidad de realizar efectivamente compras (192).

**7.6.3.4. Libre práctica.**—En el tráfico intracomunitario de navíos transbordadores, ninguna exención de derechos de aduana puede ser aplicada a las mercancías puestas en libre práctica contenidas en los equipajes personales de los viajeros, en el momento de su importación a un Estado miembro (180).

(187) As. 325/82, Comisión/Alemania, Rec. 1984-2, pp. 777-798, cdo. 22.

(188) JOCE, núm. L 139, p. 28.

(189) JOCE, núm. L 181, p. 1.

(190) JOCE, núm. L 185, p. 3.

(191) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 278/82, Rewa/Hauptzollämter, Rec. 1984-2, pp. 721-776, cdo. 17 y parte dispositiva.

(192) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 278/cit., parte dispositiva.

(193) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 278/82, cit., cdo. 25 y parte dispositiva.

## 7.7. Política social

**7.7.1. Igualdad de derechos de hombres y mujeres.**—La Gran Bretaña ha faltado a las obligaciones que le impone la directiva 76/207 (194) al omitir las medidas necesarias a fin de que las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuran en los convenios colectivos o en los reglamentos internos de las empresas así como en los estatutos de las profesiones independientes sean nulos, puedan ser declarados nulos o puedan ser enmendados y lo mismo se afirma por parte del Tribunal (195) cuando se excluye de la aplicación de este principio todo empleo que cubra las necesidades de una residencia privada o cuando el número de empleados no exceda de cinco.

No obsta, por otra parte (196) el hecho de que los citados convenios colectivos no sean de carácter coactivo, pues la directiva citada afecta a todos los convenios sin hacer distinciones en relación a su naturaleza jurídica y a los efectos que produzca o a su carencia de efectos. Siendo el motivo de esta disposición tan generalizada el que dichos convenios colectivos, aun sin tener efectos coactivos, producen importantes consecuencias de hecho en las relaciones de trabajo y de empleo a los que afectan.

**7.7.2. Posible discriminación por razón de sexo. Comadronas.**—Afirma el Tribunal (197) que aunque no se puede discutir que los Estados miembros tienen la obligación de poner en práctica el principio de la igualdad de trato, hay que reconocer que en el momento presente existen susceptibilidades personales que pueden jugar un papel importante en las relaciones entre la comadrona y su paciente. Según ley vigente en el Reino Unido el acceso de los hombres a dicha profesión y su formación no puede tener lugar más que en algunos lugares limitados, pues esta profesión no es ejercitada tradicionalmente por hombres y es un ámbito en el que la sensibilidad de las pacientes se impone muy particularmente, por lo que dicha limitación es conforme al artículo 2.2 de la directiva (198). Sin embargo habrá que proceder por etapas y vigilar la evolución de la situación para acomodarse a las exigencias de la misma directiva en su artículo 9.2.

## 7.8. Política común de transportes

## 7.9. Política Industrial

**7.9.1. Aplicación por igual del régimen de cuotas.**—Afirma el Tribunal (199) que no es discriminación el haber hecho extensivo el régimen de cuotas en la

(194) Directiva del Consejo 76/207 de 9 de febrero de 1976, JOCE, L 39, p. 40.

(195) Sentencia de 8 de noviembre de 1983, as. 165/82, Rec. 1983-10, pp. 3431-3460, parte dispositiva.

(196) Ibidem, cdo. 11.

(197) Sentencia de 8 de noviembre de 1982, as. 165/82, Rec. 1983-10, pp. 3431-3460, cdos. 18 y 20.

(198) Directiva del Consejo cit.

(199) Sentencia de 15 de diciembre de 1983, as. ac. 31, 138 y 204/82, Rec. 1983-11, pp. 4193-4217, cdos. 12 y ss.

siderurgia a Grecia, pues este régimen ha de repartir equitativamente, entre todas las empresas de la Comunidad, los sacrificios inevitables que entraña la crisis siderúrgica, caracterizada por una reducción de la demanda y un deterioro del nivel de los precios, cualquiera que sea la localización geográfica de la empresa.

Y en base al principio de la economía de medios, artículo 5 del Tratado CECA, la Comisión está justificada para adaptar sus intervenciones, respecto a las diferentes categorías de productos, a lo que estime indispensable con vistas a restablecer el equilibrio entre la producción y la demanda.

La circunstancia de que la demandante se encuentre en una situación de hecho más restrictiva en comparación a otras empresas cuya producción es más diversificada no puede ser considerada una discriminación imputable a la Comunidad.

Por otra parte, no se puede acudir al criterio de garantizar una tasa mínima de explotación de las capacidades instaladas, como el Tribunal ya ha afirmado, que impediría atender a los objetivos establecidos en el artículo 58 del Tratado (200).

Finalmente señala el Tribunal que la cuestión litigiosa tiene un marcado carácter teórico, pues la demandante no ha sido capaz de completar las cuotas de producción que le habían sido concedidas.

**7.9.2. Objetivo del sistema de cuotas CECA.**—En la sentencia de 29 de febrero de 1984 (201) ha indicado el Tribunal que el argumento de que se pueden sobrepasar las cuotas de producción de acero asignadas a una empresa, debido a ventas importantes fuera de la Comunidad, no puede servir para justificar una multa menos elevada que en el caso de que el exceso de producción se debiera a ventas operadas dentro de la Comunidad.

Justifica esta apreciación el Tribunal en el hecho de que la responsabilidad de la gestión de los negocios así como los riesgos a ellos inherentes, han de ser asumidos por las empresas que en la planificación de su actividades han de tener en cuenta las circunstancias en las operaciones, como el clima del país de destino de las mercancías. Estos datos no pueden descargar de su responsabilidad a las empresas en lo que respecta a las cuotas asignadas porque el sistema de cuotas de producción de acero trata de hacer frente y superar la crisis manifiesta en el mercado del acero lo que se vería gravemente comprometido si se pudieran considerar las circunstancias externas para eludir restricciones y sobrepasar las cuotas asignadas a una empresa.

**7.9.3. Sistema de cuotas.**—La toma en consideración de los intercambios exteriores en el marco de las medidas a tomar en virtud del artículo 58 del Tratado CECA se incluye en la apreciación de la Comisión que deben tener en cuenta tanto las necesidades propias del mercado siderúrgico comunitario como los intereses de la Comunidad en sus relaciones con los países terceros. Por ello no se deriva del artículo 58 citado la obligación de la Comisión de exceptuar del régimen de cuotas los productos que ciertas empresas desearían enviar preferentemente hacia los mercados de exportación.

(200) Sentencia de 11 de mayo de 1983, as. Klöckner, 244/84, Rec., p. 1451.

(201) As. 270/82, Estel-Comisión, Rec. 1984-2, pp. 1195-1228, cdos. 22 a 24.



Y cuando se sanciona un exceso en la producción no se condena la operación de exportación hacia un país tercero sino el nivel global de producción realizado en un trimestre (202).

**7.9.4. Monoproductores.**—La decisión 533/82 de la Comisión (203) que modifica por tercera vez la decisión 1.831/81 que instaura un régimen de vigilancia y un nuevo régimen de cuotas de producción de ciertos productos para las empresas de la industria siderúrgica y la decisión 1.698/82 de la Comisión (204), relativa a la adaptación de tasas de abastecimiento de la categoría V para el tercer trimestre de 1982 en favor de ciertas empresas son anulados (205).

Estima el Tribunal (206) que esos actos están afectados de desviación de poder en cuanto que la imposición general de cuotas de todo un grupo de empresas caracterizadas por su estructura no puede ser decidida por la Comisión más que según el procedimiento prescrito por el artículo 58 del Tratado CECA, es decir, consultando al Comité consultivo y tras la obtención del dictamen favorable del Consejo. Por tanto, en base a los artículos 16 y 18 de las Decisiones de base la Comisión ha eludido el procedimiento especial previsto por el Tratado CECA a estos efectos.

**7.9.5. Imposibilidad de invocar estado de necesidad.** No se puede invocar el estado de necesidad por parte de una empresa para sustraerse a la aplicación de las restricciones de su producción previstas por el régimen de cuotas y al pago de las multas que se le han impuesto por haberse excedido en la producción.

El exceso sistemático sobre las cuotas de producción ha provocado un obstáculo considerable al funcionamiento de este régimen (207). Y como ya ha declarado el Tribunal (208) el hecho de admitir el estado de necesidad como argumento que justifique el exceso de las cuotas sería incompatible con la naturaleza y la estructura del régimen de cuotas, la aplicación de dicho principio llevaría finalmente a provocar la destrucción del mencionado sistema de cuotas. En el mismo sentido la sentencia de 30 de noviembre de 1983 (209).

**7.9.6. Multas.**—El recurso es rechazado por el Tribunal (210), pues el demandante no niega haber sobrepasado la cuota de producción asignada, atacando la legalidad de las decisiones individuales de la Comisión que habían llegado a ser definitivas al no haberse impugnado en el plazo prescrito por el Tratado. En este sentido hay abundante jurisprudencia (211).

(202) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 235/2, Rec. 1983-10, pp. 3949-3979, cdos. 6 y ss.

(203) Decisión de 3 de marzo de 1982, JOCE, L 65, p. 6.

(204) Decisión de 30 de junio de 1982, JOCE, L 191, p. 43.

(205) Sentencia de 21 de febrero de 1984. Asuntos acumulados 140, 146, 221 y 226/82, Rec. 1984-2, pp. 951-1003.

(206) Ibidem, cdo. 22 y ss.

(207) Sentencia de 14 de diciembre de 1983, as. 263/82, Rec. 1983-11, pp. 4143-4171, cdos. 22 y 23.

(208) Sentencia de 11 de mayo de 1983, as. 303 y 312/81, Klöckner, Rec. 1983, p. 1507.

(209) As. 235/82, Rec. 1983-10, pp. 3949-3979, cdo. 32.

(210) Sentencia de 16 de febrero de 1984, as. 76/83, Rec. 1984-2, pp. 859-881, cdo. 4 y ss.

(211) Sentencia de 31 de marzo de 1985, as. 21/84, Macchiorati Dalmas, Rec., p. 229.

Y puesto que una adaptación de cuotas individuales no se realiza más que a título excepcional, el silencio de la Comisión no puede ser interpretado como una acepción tácita de lo demandado sino que implica un implícito rechazado de la petición.

Por otra parte el Comité consultivo y el Consejo no tienen que ser consultados cuando se trata de una simple puesta en práctica de las modalidades de ejecución en el marco del poder de apreciación que compete a la Comisión (art. 12 Decisión 1.831/81/CECA).

**7.9.7. Reducción de multa.**—La multa impuesta por haber sobrepasado la cuota de producción asignada es reducida por el Tribunal (212) a la vista de que la Comisión no ha tenido en cuenta en su decisión del 4 de noviembre las circunstancias por la que atravesaba la empresa notificadas a ella el 28 de agosto. La Comisión, a juicio del Tribunal, ha debido indicar en tiempo útil, cuáles eran sus intenciones con vistas a remediar esa situación injusta y de qué manera la empresa podría hacer frente a sus dificultades sin riesgo de sobrepasar la cuota definitiva.

El Tribunal (213) reduce la multa impuesta por la Comisión a una empresa de 288.825 Ecus a 5, cantidad simbólica, como afirma el mismo Tribunal (214) en vista de las circunstancias excepcionales en las que la infracción a la norma de las cuotas de producción fijadas ha sido cometida.

Anula el Tribunal (215) las decisiones individuales dirigidas por la Comisión los días 30 de marzo y 20 de julio de 1982 a «Thyssen Aktiengesellschaft» y relativas a las producciones de referencia y a las cuotas de producción de esta empresa para el segundo y tercer trimestre de 1982, en cuanto que afectan a las tasas de abastecimiento para la categoría V, conforme a los argumentos ya enunciados (216).

**7.9.8. Causas de anulación de una multa.**—El Tribunal anula la decisión de la Comisión de fecha 13 de agosto de 1982 que imponía una multa a una sociedad (217) y ello porque la sociedad reclamante tenía derecho a acumular en el tercer trimestre de 1981 una parte de la fracción no utilizada de cuota que se le había asignado para el segundo trimestre, en los límites fijados normativamente, por lo que el exceso sobre la cuota permitida era muy reducida —323 toneladas— y la Comisión en excesos sobre la cuota fijada de menos de 500 toneladas y en primera infracción tiene como práctica constante no imponer multa.

No se puede, pues, violar el principio de Igualdad que exige que situaciones semejantes no sean tratadas de manera diferente, a menos que exista una justificación objetiva de la diferenciación.

(212) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 2/83, Rec. 1984-2, pp. 779-816.

(213) Sentencia de 16 de noviembre de 1983, as. 188/82, Rec. 1983-10, pp. 3721-3749 parte dispositiva.

(214) Ibidem, cdo. núm. 23 y 24.

(215) Sentencia de 21 de febrero de 1984, as. ac. 140, 146, 221 y 226/82, Rec. 1984-2, pp. 951-1003.

(216) Ibidem, cdos. núms. 22 y ss.

(217) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 234/82, Rec. 1983-10, pp. 3921-3947.

## 8. CUESTIONES PROCESALES

### 8.1. Cuestiones generales

**8.1.1. Principios que rigen las vías de recursos.**—En la sentencia de 15 de noviembre de 1983 (218), ante la alegación del Gobierno francés de salvaguardar el principio de protección a la confianza legítima, manteniendo unos contratos ya concluidos, en los que se contravenía una decisión de la Comisión (219) que imponía la obligación de poner fin al régimen de dichos contratos a partir de la fecha de la decisión, el Tribunal estima que el argumento del Gobierno francés no concierne a la interpretación de la decisión, sino que constituye un medio que afecta a la validez de ésta y que sólo puede servir de base para la anulación, pues si se permitiera a un Estado miembro destinatario de una decisión, adoptada en aplicación del artículo 93 TCEE, impugnar su validez con ocasión del recurso contemplado en el párrafo 2.º de esta misma disposición, tras la expiración del plazo previsto en el artículo 173 TCEE, ello sería irreconciliable con los principios que han de regir las vías de recursos instituidas por el Tratado y atentaría a la estabilidad del sistema, así como contra el principio de seguridad jurídica en el que se inspira.

**8.1.2. Plena jurisdicción del Tribunal.**—El Tribunal, en base al artículo 36, 2 del Tratado, tiene plena jurisdicción sobre los recursos en materia de sanciones pecuniarias y de apremios establecidas en virtud de disposiciones del mismo Tratado (220).

### 8.1.3. Dictamen motivado en la Comisión

**8.1.3.1. Objeto.**— En la sentencia de 14 de febrero de 1984 (221), ha declarado el Tribunal que en el marco de un recurso por incumplimiento, la carta de requerimiento dirigida por la Comisión al Estado miembro después del dictamen motivado emitido por la Comisión deben permitir al Estado miembros afectado presentar sus observaciones y constituyen una garantía esencial querida por el Tratado; su observancia es una forma sustancial de la regularidad del procedimiento de incumplimiento de un Estado miembro. El dictamen al cual se refiere el artículo 169 del Tratado CEE debe ser considerado como motivado suficientemente en Derecho, cuando contiene una exposición coherente de razones que han conducido a la Comisión a la convicción de que el Estado interesado ha faltado a una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

[218] As. 52/83, Comisión Francia, Rec. 1983-10, pp. 3707-3720, cdos. 1 a 11 y parte dispositiva.

[219] Decisión de la Comisión 83/245, de 12 de enero de 1983, relativa a un régimen de ayudas en favor del textil y del vestido en Francia. JOCE, núm. L 137, p. 24.

[220] Sentencia de 16 de noviembre de 1983, as. 188/82, Rec. 1983-10, pp. 3721-3749.

[221] As. 325/82, Comisión/Alemania, Rec. 1984-2, pp. 777-798, cdo. 8.

**8.1.3.2. Precisión de motivos.**—En el marco del procedimiento previsto por el artículo 169 del Tratado CEE, el recurso intentado por la Comisión debe tener el mismo objeto que el dictamen motivado. Si éste debe estar precedido por un requerimiento, nada impide a la Comisión precisar, en el dictamen motivado, los motivos de incumplimiento que ya ha hecho valer de manera más global en la carta de requerimiento, ya que, en efecto, la respuesta a esta carta puede dar lugar a un nuevo examen de estos motivos (222).

**8.1.4. Justificación deducida de una eventual falta de otro Estado miembro: Inadmisibilidad.**—Como ha declarado en otra ocasión (223), ha señalado el Tribunal, que un Estado miembro no puede, presentar una excepción al principio de reciprocidad y alegar un eventual desconocimiento del Tratado por otro Estado miembro para justificar su propio incumplimiento (224).

**8.1.5. Falta de regularización de la demanda.**—En el auto de 17 de noviembre de 1983 (225), ha declarado el Tribunal inadmisibile y ordenado retirar el asunto de la Secretaría, por cuanto el interesado no ha regularizado su demanda presentándola por intermedio de un abogado, en el plazo impartido, conforme al artículo 38, párrafo 7, del reglamento de procedimiento del Tribunal.

**8.1.6. Medidas provisionales.**—En el asunto 1/84 R (226), el presidente del Tribunal ha ordenado la suspensión de la decisión de la Comisión dirigida a la República de Italia de 20 de octubre de 1983, por la que se autorizaba a dicho Estado a excluir del trato comunitario las películas de color originarias de Japón, por cuanto según las explicaciones proporcionadas por la empresa demandante y no contradichas por la Comisión, la ejecución de dicha decisión podría poner a esta empresa en una situación extremadamente difícil.

**8.1.7. Reglamentación de recursos en caso de «dumping» por parte de exportadores de terceros países.**—En su sentencia de 21 de febrero de 1984 (227), el Tribunal entiende que, de acuerdo con los términos del artículo 13-1.º del R/3017/79 del Consejo de 20 de diciembre de 1979 (228) «los derechos antidumping o compensadores, ya sean aplicables a título provisional o definitivo, se instituyen mediante reglamento». Si bien es verdad que respecto de los criterios del artículo 173-2.º por su propia naturaleza y su alcance tienen un carácter efectivamente normativo, por cuanto se aplican a la generalidad de los agentes económicos interesados, no queda excluido, sin embargo, que sus disposiciones puedan

(222) Sentencia de 31 de enero de 1984, as. 74/82, Comisión/Irlanda, Rec. 1984-1, pp. 317-348, cdo. 20.

(223) Sentencia de 25 de septiembre de 1975, as. 232/78, Comisión/Francia, Rec. 979, p. 2729.

(224) Sentencia de 14 de febrero de 1984, as. 325/82, Comisión/Alemania, Rec. 1984-2, páginas 777-798, cdo. 11.

(225) As. 73/83, Rec. 1983-10, pp. 3803-3804.

(226) Auto del presidente del Tribunal de 1 de febrero de 1984, Ilford/Comisión, Rec. 1984-2, pp. 423-432, cdos. 20 y 21 y parte dispositiva.

(227) Asuntos acumulados 239 y 257/82, Rec. 1984-2, pp. 1005-1049, cdos. 11 a 15.

(228) JOCE, L 339, p. 1.

afectar directa e individualmente a aquellos productores y exportadores a quienes se puedan imputar prácticas de dumping. Así resulta del artículo 2.º del citado reglamento que los derechos antidumping no se pueden instituir más que en función de constataciones resultantes de investigar los precios de producción y de exportación de empresas individualizadas.

Aparece así que los actos que instituyen derechos antidumping por su propia naturaleza tienden a afectar directa e individualmente a las empresas productoras y exportadoras que puedan demostrar que han sido identificadas en los actos de la Comisión o del Consejo o afectadas por las investigaciones preparatorias.

El Tribunal declara que, como acertadamente lo ha expuesto la Comisión el reconocimiento de un derecho de recurso a empresas calificadas de esta forma, de acuerdo con los principios del artículo 173-2.º, no corre el riesgo de crear doble instancia en materia de vías de recurso, puesto que la interposición de un recurso ante las jurisdicciones nacionales, sólo tiene lugar tras la percepción del derecho antidumping, percibido normalmente por importadores residentes en la CEE.

En cambio, el Tribunal considera que la situación es diferente en el caso de una sociedad de importación estadounidense establecida en un Estado miembro que no está comprendida en ninguno de estos casos sujetos a recurso. En este sentido no se encuentra afectada por los efectos de los reglamentos en cuestión más que en tanto en cuanto entre, de forma objetiva, en el ámbito de aplicación de las normas previstas por los mismos. Así podrá disponer de una única vía de recurso, ante la jurisdicción nacional competente, en cuyo ámbito puede hacer valer sus derechos frente a la normativa de los reglamentos.

## 8.2. Procedimiento administrativo

**8.2.1. Objeto del procedimiento administrativo seguido por la Comisión en la adopción de sus decisiones.**—En su sentencia de 8 de noviembre de 1983 (229), el Tribunal estima que el objeto del procedimiento administrativo preliminar consiste en la preparación de la decisión de la Comisión respecto de la posible infracción de las normas de competencia, pero que también supone una oportunidad para que las empresas afectadas puedan adaptar las prácticas incriminadas a las normas del Tratado.

Aunque el hecho de que la Comisión no se haya pronunciado respecto del proyecto de acuerdo particular que se le presenta en el caso en cuestión, precisamente para su adaptación al Tratado, sea lamentable y no se conforme a las exigencias de una correcta administración, no se podría considerar como una transgresión del procedimiento que invalidase la decisión por completo.

**8.2.2. Procedimiento precontencioso: Objeto.**—En la sentencia de 31 de enero de 1984 (230), ha señalado el Tribunal que al comprobar formalmente la violación del tratado por un Estado miembro, el dictamen motivado de la Comisión concluye

(229) Asuntos acumulados 96-102, 104, 105, 108 y 110/82, Rec. 1983-10, pp. 3369-3430, cdo. 15.

(230) As. 74/82, Comisión/Islanda, Rec. 1984-1, pp. 317-348, cdo. 13.

el procedimiento precontencioso previsto en el artículo 169 del Tratado CEE. Este tiene por finalidad dar la ocasión al Estado miembro, de una parte, de regularizar su situación antes de que se inste al Tribunal y, de otra parte, hacer valer sus medios de defensa contra los incumplimientos retenidos por la Comisión.

Según la jurisprudencia constante del Tribunal, el objeto de un recurso en aplicación del artículo 169 del Tratado CEE está circunscrito por el procedimiento administrativo precontencioso previsto en esta disposición así como por las conclusiones del recurso. El dictamen motivado de la Comisión y el recurso deben estar fundados sobre los mismos motivos y medios (231).

### 8.3. Procedimiento judicial

#### 8.3.1. Recurso de interpretación

**8.3.1.1. Reparto de funciones jurisdiccionales operado por el artículo 177 del Tratado CEE.**—En la sentencia de 14 de febrero de 1984 (232), se ha manifestado, que no pertenece al Tribunal comunitario pronunciarse sobre la necesidad de la demanda de decisión prejudicial. En el marco del reparto de funciones jurisdiccionales entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal, operada por el artículo 177 del Tratado CEE, incumbe, en efecto, al juez nacional, que es el único en tener un conocimiento directo de los hechos del asunto como también de los argumentos planteados por las partes y que debe asumir la responsabilidad de la decisión judicial, apreciar, con pleno conocimiento de la cuestión, la pertinencia de las cuestiones de derecho planteadas por el litigio del que conoce y la necesidad de una decisión prejudicial para dictar una sentencia.

El Tribunal sólo puede, en el marco de un recurso prejudicial, proporcionar la interpretación del derecho comunitario que le es solicitada. Por el contrario, corresponde al juez nacional apreciar —en caso de necesidad— a la luz de las indicaciones proporcionadas por el Tribunal— si la legislación en cuestión contiene o no una prohibición de las exportaciones (233).

El Tribunal comunitario ha reiterado que si bien no le corresponde, en el marco del artículo 177 del Tratado de la CEE, pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones de una ley nacional con el tratado, es competente, por el contrario, para proporcionar a la jurisdicción nacional todos los elementos de interpretación que se desprenden del derecho comunitario y que pueden permitirle juzgar tal compatibilidad (234).

Si bien no corresponde al Tribunal, en el marco del artículo 117 del Tratado de la CEE, pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones de una ley nacional con el Tratado, aquél es, por el contrario, competente para proporcionar

(231) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 166/82, Comisión/Italia, Rec. 1984-2, pp. 459-481, cdo. 16.

(232) As. 278/82, Rewe/Hauptzollämter Flensburg, Rec. 1984-2, pp. 721-776, cdo. 8.

(233) Sentencia de 9 de febrero de 1984, as. 295/82, Rec. 1984-2, pp. 575-589, cdo. 12.

(234) Sentencia de 7 de febrero de 1984, as. 237/83, Rec. 1984-2, pp. 483-522, cdo. 6.

a la jurisdicción nacional todos los elementos de interpretación que se desprenden del derecho comunitario y que pueden permitirle juzgar dicha compatibilidad(235).

**8.3.1.2. Derecho abierto a toda jurisdicción nacional.**—En la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (236), ha declarado el Tribunal que, según su jurisprudencia constante, el derecho de acudir ante él, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, pertenece a toda jurisdicción de los Estados miembros, cualesquiera que sean, por otra parte, el estado del contencioso en el que tal jurisdicción se encuentre y la naturaleza de la decisión que está llamada a dictar.

**8.3.1.3. Efectos.**—Ha afirmado el Tribunal, en la decisión de 13 de diciembre de 1983 (237), que la interpretación de las reglas de Derecho comunitario dadas por el Tribunal en el cuadro del artículo 177 TCEE, puede y debe ser aplicada por el juez nacional a las relaciones jurídicas nacidas antes de la sentencia resolutoria de la demanda de Interpretación, si se reúnen las condiciones que permiten elevar las jurisdicciones nacionales competentes un litigio relativo a la aplicación de disposiciones comunitarias.

**8.3.1.4. Inadmisibilidad.**—En el auto de 9 de noviembre de 1983 (238), el Tribunal se ha declarado manifiestamente incompetente para conocer la demanda de decisión prejudicial que, por tanto, considera inadmisibile, según el artículo 92, párrafo 1, combinado con el 103, párrafo 2, del reglamento de procedimiento, ya que el auto de reenvío no ha sido adoptado en las condiciones previstas en el artículo 2, punto 2, del protocolo de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.

#### 8.3.1.5. Recurso de anulación

**Ambito.**—Con ocasión de un recurso de anulación dirigido contra una decisión individual, el demandante no puede alegar, por vía de excepción, la ilegalidad de otra decisión individual de la que ha sido destinatario y que ha llegado a ser definitiva por no haber sido impugnada en el plazo prescrito para ello por el Tratado, según la sentencia de 29 de febrero de 1984 (239).

**Ejecución de la sentencia de nulidad.**—La ejecución de una sentencia de nulidad exige un cierto número de medidas administrativas, por lo que no puede efectuarse, normalmente, de forma inmediata señala el Tribunal en sentencia de 12 de enero de 1984 (240). El artículo 34, párrafo 2, CECA, tiene en cuenta estas

(235) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 227/82, Rec. 1983-10, pp. 3883-3919, cdo. 10.

(236) As. 199/82, Administration des Finances de l'Etat/San Giorgio, Rec. 1983-10, pp. 3595-3637, cdo. 8.

(237) As. 222/82 Apple and pear Development Council/Lewis, Rec. 1983-11, pp. 4083-4142, cdos. 38 y 39 y parte dispositiva.

(238) As. 80/83, Habourdin/Italocremona, Rec. 1983-10, pp. 3639-3641.

(239) As. 270/82, Estel-Comisión, Rec. 1984-2, pp. 1195-1228, cdo. 11.

(240) As. 266/82, Turner/Commission, Rec. 1984-1, pp. 1-17, cdo. 5.

circunstancias cuando concede expresamente a la alta autoridad un «plazo razonable» para adoptar «las medidas que supone la ejecución de una sentencia de nulidad». Las razones que justifican este artículo llevan a reconocer que la Comisión igualmente dispone de un «plazo razonable» para ejecutar una sentencia de nulidad de una decisión adoptada en el marco del Tratado CEE, incluso en ausencia de una disposición expresa a este respecto en dicho Tratado.

**8.3.1.6. Recurso en materia de funcionarios: Admisibilidad.**—No se puede negar la admisibilidad de un recurso de un funcionario contra una decisión de la Administración alegando que ésta no había sido adoptada por la autoridad con poder de nombramiento, determinada según el artículo 2 del estatuto del funcionario, desde el momento en que, por la cualidad de su autor, podía ser considerada por el funcionario afectado como una decisión de la autoridad competente, mantiene el Tribunal en sentencia de 19 de enero de 1984 (241).

**Revisión de una sentencia.**—La revisión de una sentencia del Tribunal, según el estatuto del mismo, no puede ser pedida más que en base del descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que tenga una influencia decisiva y que fuera desconocido por el mismo Tribunal y por la parte que solicita la revisión antes de pronunciarse la sentencia (242).

**Condena en costas.**—Según los términos del artículo 69,2 del reglamento de procedimiento, toda parte que recibe un fallo desfavorable es condenada en costas si así los establece el Tribunal, como en el caso de autos (243).

## 9. RELACIONES EXTERIORES

(241) As. 65/83, Erdini/Conseil, Rec. 1984-1, pp. 211-228, cdos. 6 y 7.

(242) Sentencia de 24 de noviembre de 1983, as. 107/79, Rec. 1983-10, pp. 3805-3809, cdo. 1.

(243) Sentencia de 30 de noviembre de 1983, as. 235/82, Rec. 1983-10, pp. 3949-3979, cdo. 39.



**COMISION Y TRIBUNAL EUROPEOS  
DE DERECHOS HUMANOS**

